

La Serena, a diecinueve de junio de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que se instruyó esta causa Rol N°3-2011 (Antofagasta), para investigar el delito de secuestro calificado, en grado de consumado, cometido en contra de Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, y determinar la responsabilidad penal que en esos hechos correspondió a Eduardo Julio Aguilar Valdés, cédula nacional de identidad N° 2.930.884-5, natural de Santiago, nacido el 7 de junio de 1938, de 82 años de edad, casado, Coronel en retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en calle Miraflores N°907, comuna de Chimbarongo; Ricardo Lillo Morandé, cédula de identidad N°5.204.740-4, natural de Santiago, nacido el 27 de enero de 1944, de 79 años de edad, casado, Coronel en retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en pasaje Simón González N° 8740, casa B, condominio Jardines La Reina, Comuna de La Reina; y Juan Arturo León Hernández, cédula nacional de identidad N°6.431.592-7, natural de Cauquenes, nacido el 9 de diciembre de 1949, de 73 años de edad, casado, Sargento 1° en retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en Serrano N° 970, comuna de Antofagasta.

El proceso se inició por querrella criminal de fojas 1, por los delitos de homicidio y asociación ilícita, interpuesta por doña Alicia Lira Matus, en su calidad de representante de la Organización no Gubernamental (ONG), denominada "Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos" (AFEP), con el objeto de que se investigue el hecho y las circunstancias que ocasionaron la muerte de Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, así como la identidad de los responsables, en especial, de los integrantes de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y Carabineros, ambos de Antofagasta, se acoja a tramitación, se decrete auto de procesamiento en su oportunidad y en definitiva aplicar a los responsables el máximo de la pena legal, con costas.

A fojas 119, don Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, en virtud del Programa establecido por la Ley 19.123, dedujo querrella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBR SX

encubridores de los delitos de secuestro, torturas y homicidio calificado, en grado de consumado, cometidos en contra de Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, solicitando que se acoja a tramitación, se decreten las diligencias que solicita, se someta a proceso a quienes corresponda, acusarlos y en definitiva sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fojas 1119, se sometió a proceso a Eduardo Julio Aguilar Valdés y Juan Arturo León Hernández, como autores del delito de detención ilegal en la persona de Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, hecho perpetrado en la ciudad de Antofagasta el día 2 de septiembre de 1974.

A fojas 1225, se confirma auto de procesamiento de fojas 1119, con declaración de que Eduardo Julio Aguilar Valdés y Juan Arturo León Hernández, quedan sometidos a proceso como autores del delito de secuestro previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, hecho perpetrado en Antofagasta el 29 de agosto de 1974.

A fojas 1543, los abogados Magdalena Garcés Fuentes, Cristián Cruz Rivera, Hugo Montero Toro, Boris Paredes Bustos y Sebastián Velásquez Díaz, en representación de Nelly Adela Álvarez Segovia, Luisa Elizabeth Álvarez Segovia, Mercedes del Rosario Álvarez Segovia, Gumerindo del Pilar Álvarez Segovia y David Alberto Álvarez Segovia, dedujeron querella criminal en contra de los ex agentes del Estado ya procesados en autos, así como en contra de todos los que resulten responsables, en su calidad de autores, cómplices o encubridores, de la detención ilegal y del homicidio calificado de su padre Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, como de los demás ilícitos que resulten acreditados en el sumario, solicitando acogerla a tramitación, en su momento acusar a los procesados y, en definitiva, sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fojas 1818, se rectifica auto de procesamiento de fojas 1119 y 1225. Se somete a proceso a Eduardo Julio Aguilar Valdés, Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández, como autores, en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, del delito de Secuestro Calificado, en grado de consumado, de Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

cometido entre los días 29 de agosto al 2 de septiembre de 1974 en la ciudad de Antofagasta.

A fojas 2017, se declara cerrado el sumario.

A fojas 2039, se dictó acusación judicial en contra de Eduardo Julio Aguilar Valdés, Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández como autores, en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, del delito de secuestro calificado en grado de consumado, cometido en contra de Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre de 1974 en la ciudad de Antofagasta.

A fojas 2052, el abogado Álvaro Aburto Guerrero, por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dedujo acusación particular en contra de Eduardo Julio Aguilar Valdés, Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández, como autores del delito de secuestro agravado y asociación ilícita, cometidos en la víctima Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, invocando contra los acusados las circunstancias agravantes del artículo 12 N°8 y N°11 del Código Penal.

A fojas 2056, la abogada Adriana Rojas Pérez, por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dedujo acusación particular en contra de Eduardo Julio Aguilar Valdés, Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández, como autores del delito de secuestro agravado y asociación ilícita, cometidos en la víctima Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, invocando contra los acusados las circunstancias agravantes del artículo 12 N°8 y N°11 del Código Penal.

A fojas 2069, el abogado Cristián Cruz Rivera, en representación de Nelly Adela Álvarez Segovia, Luisa Elizabeth Álvarez Segovia, Mercedes del Rosario Álvarez Segovia, Gumerindo del Pilar Álvarez Segovia y David Alberto Álvarez Segovia, dedujo adhesión a la acusación y demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

A fojas 2207, el abogado Juan Carlos Muñoz Torres, en representación de Ricardo Lillo Morandé, contesta acusación fiscal, particulares y adhesiones.

A fojas 2223, el abogado Mauricio Alex Suazo Araya, en representación de Juan Arturo León Hernández, contesta acusación fiscal, acusaciones particulares y adhesión.

A fojas 2250, el abogado Alejandro Azúa Vega, en representación de Eduardo Julio Aguilar Valdés, contesta acusación fiscal, acusaciones particulares y adhesión.

A fojas 2270, contesta demanda civil el abogado Carlos Alberto Vega, abogado Procurador Fiscal de La Serena del Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile, solicitando el rechazo de las acciones en todas sus partes, con costas.

A fojas 2289 se recibió la causa a prueba.

A fojas 2494, se sobresee parcial y definitivamente, por fallecimiento de Eduardo Julio Aguilar Valdés.

A fojas 2577 se certificó el vencimiento del término probatorio.

A fojas 2578 se trajeron los autos para efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal.

A fojas 2643 se trajeron los autos para dictar sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

#### **EN CUANTO AL FONDO:**

**PRIMERO:** Que a fojas 2039, se dictó acusación judicial en contra de Eduardo Julio Aguilar Valdés, Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández, como autores del delito de secuestro calificado, en grado de consumado, cometido en contra de la persona de Gumercindo del Carmen Álvarez Pizarro, ilícito perpetrado entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre de 1974 en la ciudad de Antofagasta. Los hechos en que se fundó la acusación son los siguientes:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

- a. Que la víctima Gumerindo del Carmen Álvarez Segovia fue detenido por efectivos del Servicio de Inteligencia de Carabineros de Chile (SICAR) -entre ellos Juan León Hernández- quienes no portaban orden alguna que los facultara para tal efecto, frente a su domicilio la tarde del día 29 de agosto de 1974.
- b. Que la víctima es trasladada al Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta, lugar donde se encontraban las dependencias de dicho Servicio de Inteligencia, a cargo del Capitán de Carabineros Eduardo Aguilar Valdés.
- c. Que, estando privado de libertad, sin derecho, fue torturado por personal del SICAR, provocándole la muerte con fecha 2 de septiembre de 1974.

Que por su parte, a fojas 2052, el abogado don Álvaro Aburto Guerrero, por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dedujo acusación particular en contra de Eduardo Julio Aguilar Valdés, Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández, como autores del delito de secuestro agravado y asociación ilícita -con la salvedad que respecto de Aguilar Valdés, su autoría en el secuestro agravado sería de conformidad al artículo 15 N°2 del Código Penal-, cometidos en la víctima Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro. Argumenta que todos los inculpados en esta causa son coautores del delito de secuestro agravado cometido en la persona de Gumerindo Álvarez. Que en este caso el agravamiento de la privación ilegítima de libertad de la víctima se fundamenta en el grave daño sufrido por ésta, tanto en lo que dice relación con las torturas sufridas durante su cautiverio en el Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta, como en lo que se refiere a su muerte en ese mismo lugar la jornada del día 2 de septiembre de 1974. Este crimen fue perpetrado a partir de una organización delictual que operaba bajo el amparo del Estado de Chile, lo que constituye un delito de peligro autónomo respecto al resultado del secuestro. Solicita que Eduardo Julio Aguilar Valdés sea condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en grado máximo, como autor del artículo 15 N°2 del Código Penal, del delito de secuestro agravado, y a 15 años de presidio mayor en grado medio, como autor del



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

artículo 15 N°1 del Código Penal, del delito de asociación ilícita para cometer crímenes, más las penas accesorias correspondientes. Respecto a los acusados Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández, solicita se les condene a la pena de 20 años de presidio mayor en grado máximo, como autores del artículo 15 N°1 del Código Penal, del delito de secuestro agravado, y a 3 años de presidio menor en grado medio, como autores del artículo 15 N°1 del Código Penal, del delito de asociación ilícita para cometer crímenes, más las penas accesorias correspondientes. Invoca contra los acusados las circunstancias agravantes del artículo 12 N°8 y N°11 del Código Penal.

A fojas 2056, la abogada doña Adriana Rojas Pérez, por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dedujo acusación particular en contra de Eduardo Julio Aguilar Valdés, Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández, en los mismos términos que el Programa de Derechos Humanos.

A fojas 2069, el abogado don Cristián Cruz Rivera, en representación de Nelly Adela Álvarez Segovia, Luisa Elizabeth Álvarez Segovia, Mercedes del Rosario Álvarez Segovia, Gumerindo del Pilar Álvarez Segovia y David Alberto Álvarez Segovia, dedujo adhesión a la acusación y demanda civil de indemnización de perjuicios, solicitando se aplique a los acusados las penas máximas establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en especial consideración que el obrar criminal de los anteriores se encuadra en las circunstancias agravantes contempladas en los numerales 6° (abuso de superioridad de fuerzas), 8° (prevalerse del carácter público del ofensor), 10° (cometer el delito con ocasión de una sedición o desgracia) y 18° (cometer el delito con ofensa o desprecio de la dignidad) del artículo 12 del Código Penal. Solicita que los acusados sean condenados como autores del delito de secuestro calificado, a una pena de presidio mayor en su grado máximo.

A fojas 2270, contesta demanda civil el abogado don Carlos Alberto Vega Araya, abogado Procurador Fiscal de La Serena del Consejo de Defensa del Estado en representación



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

del Fisco de Chile, solicitando el rechazo de las acciones en todas sus partes, con costas.

**SEGUNDO:** Que respecto del acusado Eduardo Julio Aguilar Valdés, se dictó sobreseimiento parcial y definitivo, al haber fallecido con posterioridad a la acusación de tal manera que se omitirá su contestación a las acusaciones y adhesiones en cuanto le imputaban otro delito además del contenido en la acusación de oficio.

**TERCERO:** Que a fojas 2207, el abogado don Juan Carlos Muñoz Torres, en representación del acusado Ricardo Lillo Morandé, contestó la acusación fiscal, particulares y adhesiones, solicitando la absolución de su representado fundado en que no se encontraría acreditada su participación en los hechos punibles investigados; opuso subsidiariamente, la eximente de responsabilidad penal contemplada en el artículo 214 del Código de Justicia Militar, esto es cometer un delito por la ejecución de la orden del servicio; y subsidiariamente a las peticiones anteriores, solicitó se reconozca la atenuante de responsabilidad del artículo 11 N°6 del Código Penal como atenuante muy calificada, debiendo agregarse la del artículo 211 del Código de Justicia Militar; por último solicitó se reconozca la institución de "media prescripción" reconocida en el artículo 103 del Código Penal, debiendo tenerse en suma consideración la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Agrega que, en cuanto a la acusación fiscal, la vaguedad de la descripción de los hechos contenida en la misma, dificulta gravemente una adecuada defensa. Tanto de la acusación fiscal como particulares, no hacen ninguna descripción de la participación efectiva que habría tenido Ricardo Lillo Morandé y qué actos específicos habría efectuado éste para fundamentar su supuesta autoría. Únicamente se ha podido establecer que su representado era el jefe de patrullas de la Tercera Comisaría de Carabineros, encontrándose por debajo del Capitán Eduardo Aguilar Valdés y el Mayor Francisco Núñez Venegas, lo que consta a fojas 294, en declaración policial de Juan Arturo León Hernández. En lo referente a la acusación particular del Programa de Derechos Humanos, en cuanto al delito de secuestro calificado, el abogado defensor se remite a lo expresado respecto a la acusación fiscal; respecto al



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

delito de asociación ilícita previsto en el artículo 292 del Código Penal, la parte estima que no existen antecedentes para condenar a su representado, por cuanto no existirían antecedentes concretos sobre la existencia de la jerarquización del SICAR, donde su representado no tendría rango de superioridad absoluta. En cuanto a las agravantes del artículo 12 N°8 y 11, atendido a que se alega la falta de participación, estas no podrían concurrir, ya que no se ha podido acreditar de ninguna manera una acción delictiva por parte de Ricardo Lillo Morandé. Por su parte, en cuanto a la acusación particular de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, respecto al delito de secuestro calificado y al delito de asociación ilícita, el abogado defensor se remite a los argumentos expresados respecto a la acusación fiscal y a la acusación particular del Programa de Derechos Humanos, respectivamente, misma situación para las agravantes del artículo 12 N°8 y 11 aludidas. Finalmente, en cuanto a la adhesión a la acusación fiscal interpuesta por el abogado querellante de la familia Álvarez Segovia, el abogado defensor da por íntegramente reproducidos los argumentos ya esgrimidos para la acusación fiscal. En cuanto a las agravantes del artículo 12 N°6, 8, 10 y 18, atendido a que se alega la falta de participación, refiere que estas no podrían concurrir, ya que no se ha podido acreditar de ninguna manera una acción delictiva por parte de Ricardo Lillo Morandé.

A fojas 2223, el abogado don Mauricio Alex Suazo Araya, en representación del acusado Juan Arturo León Hernández, contesta acusación fiscal, acusaciones particulares y adhesión, haciendo primeramente una propia relación de los hechos en atención a los antecedentes que obran en autos. Argumenta que los hechos no constituyen delito por concurrir en el señor León Hernández un error de prohibición inevitable o invencible. Luego, como primera calificación jurídica subsidiaria, indica que los hechos constituyen una conducta atípica de parte del señor Juan León Hernández, puesto que en su obrar se incurre un error de prohibición de carácter vencible. Como segunda calificación jurídica en subsidio, refiere que de los hechos establecidos por su parte, se configura respecto a su representado el delito de detención ilegal, previsto y sancionado en el artículo 148 inciso 1° del Código Penal, con carácter de autor, y en grado



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



consumado, puesto que al incurrirse en un error de prohibición vencible, tal conducta es reconducible a la figura penal de detención ilegal. Alega que no es posible concluir la configuración del delito de secuestro calificado respecto su representado, toda vez que no concurren los elementos subjetivos del secuestro, ni tampoco los elementos objetivos y subjetivos en el resultado de muerte de Gumerciendo Álvarez Pizarro. Solicita la absolución de su representado por el delito de secuestro calificado en base a diversos razonamientos de hecho y argumentos de Derecho. Subsidiariamente, también solicita la condena de Juan León Hernández como autor del delito de detención ilegal previsto y sancionado en el artículo 148 inciso 1º del Código Penal, radicando la pena en 41 días de prisión en su grado máximo, junto a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Para la imputación de asociación ilícita aducidas por el Programa de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, alega que no se configura dicho delito, puesto que no concurren los elementos objetivos ni subjetivos del tipo respecto a su representado, por lo que también solicita su absolución respecto de este delito o condenarlo únicamente por el delito de detención ilegal en los términos ya referidos. Contesta también las agravantes invocadas por las tres partes querellantes.

**CUARTO:** Que el delito de secuestro simple, contemplado en el artículo 141 inciso 1º del Código Punitivo, castiga con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados al sujeto que, sin derecho, encierre o detenga a otro, privándolo de su libertad.

El mismo artículo, en su inciso final, sanciona más gravemente el hecho cuando el encierro o detención se ha prolongado por más de 90 días o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido, en este caso la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados.

**QUINTO:** Que para determinar los hechos del libelo acusatorio se rindieron pruebas instrumentales, periciales, testimoniales y diligencia de reconstitución de escena que rolan en autos.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

**EN RELACIÓN A LA EXISTENCIA Y FECHA DE MUERTE DE LA VÍCTIMA:**

**SEXTO:** Que, respecto de Gumeriendo del Carmen Álvarez Pizarro, el certificado de nacimiento de fojas 37, 50, 62, comprueba que éste nació en la ciudad de Combarbalá el 02 de noviembre de 1929, la inscripción lleva el número 541 en el Registro de Nacimientos del año 1929 y sus padres eran Domingo Álvarez y Mercedes Pizarro Rojas, información que es corroborada por los antecedentes familiares de la víctima remitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación a fojas 42 y 51. Los certificados de defunción agregados a fojas 4, 140 y 356, y a fojas 5 de causa Rol N°27.788 del Segundo Juzgado del Crimen de Antofagasta, a la vista a fojas 794, dan cuenta que falleció a las 19:10 horas del día 2 de septiembre de 1974 en la ciudad de Antofagasta. De la conjunción de ambos documentos surge que la víctima tenía 44 años al momento de su muerte.

Cabe tener presente además, el comprobante de recaudación del Cementerio General de Antofagasta agregado a fojas 175, y autorización de sepultación de fojas 176, en los cuales también se consigna como fecha de fallecimiento de Gumeriendo Álvarez, el 2 de septiembre de 1974.

**EN RELACIÓN A LA DETENCIÓN Y ENCIERRO DE LA VÍCTIMA, QUE LO PRIVÓ DE SU LIBERTAD.**

**SÉPTIMO:** Que a fojas 8 de autos, se agregó Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el cual refiere sobre Gumeriendo del Carmen Álvarez Pizarro, que era casado, militante del Partido Comunista, obrero de la Empresa Minera Mantos Blancos. Se determina que: "El día 29 de agosto de 1974 su casa fue allanada y él detenido. El 2 de septiembre del mismo año falleció a consecuencia de las torturas sufridas mientras estuvo detenido en poder de Carabineros". Asimismo, a fojas 102 se aportó otro Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el cual refiere que "El 2 de septiembre de 1974 falleció Gumeriendo del Carmen Álvarez Pizarro, obrero de Mantos Blancos y militante del PS. El 29 de agosto había sido allanada en Antofagasta su casa por civiles que se identificaron como miembros de la FACH, los que se llevaron detenida a la víctima. Cuatro días



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

después fueron carabineros a su casa y les informaron a sus familiares que Gumerindo Álvarez se encontraba hospitalizado y en estado grave. En la posta les contaron que la noche anterior había llegado ya muerto en un furgón de Carabineros. Estaba muy golpeado, no tenía las uñas de las manos ni las de los pies, tenía una marca en el cuello como dejada por un alambre fino. Las huellas que registraba el cuerpo permiten a la Comisión llegar a la convicción de que Gumerindo Álvarez falleció producto de las torturas recibidas por parte de agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos".

**OCTAVO:** Que la información referida en la motivación precedente se construyó en base a los dichos de su cónyuge e hijos, quienes también depusieron en este proceso y al efecto cabe señalar que doña **Luisa Elena Segovia Segovia**, declaró en la causa Rol N° 27.788, seguida en el Segundo Juzgado del Crimen de Antofagasta, caratulada "Suicidio de Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro", iniciada el 3 de septiembre de 1974, que se tuvo a la vista a fojas 794, lo que hizo el 3 de septiembre de 1974, señalando que el día jueves anterior, llegó hasta su casa un automóvil de color azul, a las cuatro de la tarde aproximadamente y se bajaron tres personas de civil identificándose como miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, detuvieron a su marido Gumerindo Álvarez Pizarro y se lo llevaron, también le pidió la cédula de identidad y dos carnet de Mantos Blancos, lugar donde trabajaba. Hace presente que su marido ese día tenía que trabajar a las seis de la tarde, se desempeñaba como soldador empleado. El Juzgado del Crimen dejó constancia que la declarante exhibió libreta de familia, donde consta su matrimonio con Gumerindo Álvarez, Inscripción N°8 del Registro Civil de Pedro de Valdivia, bajo el N°5, de 11 de febrero de 1957. Allí también indicó que su marido le dijo en una oportunidad que se había inscrito en un partido político, al parecer el partido comunista. Añadiendo que de la muerte de su marido, se enteró el mismo 3 de septiembre en la mañana, cuando un radio patrulla le fue a avisar a su casa.

A fojas 57, 172 y 2579, declaró **Nelly Adela Álvarez Segovia**, hija de la víctima, quien refirió que su padre era trabajador de la empresa Mantos Blancos, supo que era simpatizante del Partido Socialista, recuerda que un día lunes a fines del mes de agosto, alrededor de las 09:00 horas



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

de la mañana, llegaron al domicilio de su padre unas personas que no eran uniformados, en una camioneta, posteriormente supo que eran de la Fuerza Aérea, quienes solicitaron a su padre diciendo que tenían una orden para ingresar al domicilio, llevárselo y tomarle una declaración. Lo sacaron de la casa y se lo llevaron en una camioneta. Pasó un día y su padre no llegó por lo que su madre comenzó a buscarlo en comisarías, postas y hospitales, sin éxito. Luego su madre denunció la desaparición de su padre ante el Obispo Carlos Oviedo Cavada. Dicho obispo, les comunicó días más tarde que su padre había sido detenido por personal de la Fuerza Aérea y lo habían llevado a la Escuela de Formación de Carabineros de Antofagasta. Su madre también recordó que mientras viajaba en una micro colectiva, divisó en ese lugar la misma camioneta en que detuvieron a su padre, por lo que ingresó a preguntar por él y le dijeron que ahí no habían personas detenidas. Sin embargo, luego el Obispo le confirmó que había sido trasladado a ese lugar. No recuerda si fue el mismo día o al día siguiente en que llegó al domicilio de su madre una ambulancia, donde le comunicaron que su padre estaba en el hospital, una vez en el hospital, lo encontraron en la morgue. Añade que el personal aprehensor exhibió un documento, pero sus padres eran analfabetos, por lo que no pudieron leer, y que luego de los hechos fueron vigilados durante un año y medio más o menos. Aclara que su madre les narraba todo lo sucedido.

A fojas 60, 239 y 2559, depuso doña **Luisa Elizabeth Álvarez Segovia**, hija de la víctima, quien refirió que su padre era trabajador de la empresa de Mantos Blancos, que se pudo dar cuenta que era simpatizante de algún partido político de izquierda, sin que participara en reuniones u otros eventos de índole político o sindical. Que un día del año 1974, recuerda que llegaron cuatro personas a la casa, se estacionaron afuera e ingresaron al interior buscando a su padre, quien una vez habido se lo llevaron, aunque las personas vestían de civil, de terno, y no portaban armas visibles, pero pudo ver un arma a uno de ellos que la portaba en el cinto, las personas indicaron a su madre que se lo llevaban para hacerle algunas consultas y que luego regresaría a la casa, pero pasó el tiempo y su padre no regresó, por lo que su madre y sus hermanos mayores



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

comenzaron a buscarlo por diferentes lugares de la ciudad sin éxito, hasta que su madre decidió concurrir a la Iglesia, donde se entrevistó con el Obispo de la época, don Carlos Oviedo Cavada, quien ayudó en la búsqueda de su padre. Al tiempo después les fueron a avisar unas personas que su padre se encontraba en dependencias del Hospital Regional de Antofagasta enfermo, su madre conjuntamente con su hermano concurren hasta ese centro asistencial, donde lo encontraron fallecido en la morgue, logrando establecer que lo habían matado días antes. Que al consultar por la causa de muerte le informaron a su madre que había fallecido de un ataque al corazón, por lo que decidieron retirar el cuerpo de ese lugar para darle cristiana sepultura. Que en el Hospital, a sus hermanos les contaron que su padre no tenía uñas, estaba moreteado por todos lados y en el cuello tenía lesiones compatibles con alambre de púa, todo el cuello marcado, lo que pudo corroborar personalmente. Se les dijo que su papá se había suicidado, pero resulta que no tenía cinturón, cordones o algún elemento con el cual pudiera materializar tal decisión. Señala que su padre era una persona sana, un buen padre apegado a sus hijos, por lo que no cree la versión de su suicidio, piensan que su padre falleció como consecuencia de las torturas que recibió. A fojas 2559 precisa que previo a la detención de su padre, ella estaba en la puerta de la casa cuando ve que llega el auto y se bajan las personas de civil, quienes ingresan a detenerlo. Era de día, porque estaba claro. Además en ese momento estaba su madre y su hermano David Álvarez. Su padre estaba próximo a irse a trabajar.

A fojas 104, 177, 256 y 2556, declaró **Gumerindo del Pilar Álvarez Segovia**, hijo de la víctima, quien señaló que su padre no tenía ninguna filiación política, pero era simpatizante del Presidente Salvador Allende, que un día, en horas de la mañana, en circunstancias que él se encontraba en el Colegio, a fines de agosto del año 1974, al regresar a su casa desde el colegio, a eso de las 13:00 horas, se encontró con la noticia que habían detenido a su padre, se lo habían llevado unas personas de civil que dijeron pertenecer a la Fuerza Aérea. Que después su madre salió a buscar información sobre el paradero de su padre, pero no tuvo resultados positivos, hasta que posiblemente el 30 de agosto de 1974,



llegó a la casa personal de Carabineros, quienes les informaron que su padre estaba grave en el Hospital Regional, recordando que le correspondió acompañar a su madre hasta ese lugar, donde lo encontraron en la morgue. Su madre ingresó hasta ese lugar y reconoció el cuerpo de su padre. En horas de la tarde del día 2 o 3 de septiembre del año 1974, entregaron el cuerpo de su padre, para ser trasladado a su domicilio donde lo velaron por algunas horas y alrededor de las 17 horas aproximadamente, lo fueron a sepultar al Cementerio General de Antofagasta. Con el paso de los años, se enteró que su padre había estado detenido en la Comisaría, que se encontraba ubicada detrás de la Iglesia La Providencia en la intersección de las Calles Matta esquina Chuquisaca de Antofagasta. Agrega que después de enterrar a su padre, nunca supieron nada respecto a los hechos que ocasionaron su muerte, se les dijo que se había suicidado, pero no cree esa versión porque su padre los tenía a ellos y es difícil que un padre de familia deje a sus hijos.

A fojas 106, 181, 259 y 2572, declaró **Mercedes del Rosario Álvarez Segovia**, hija de la víctima, quien señaló que el 30 de agosto del año 1974, a la edad de 15 años, se encontraba regresando a su domicilio desde el colegio a eso de las 14:00 horas, su madre le comentó que personal de las Fuerzas Armadas, que vestían uniforme similar al de la Fuerza Aérea, habían allanado su domicilio, para luego llevarse detenido a su padre, quien en ese entonces trabajaba para la empresa Mantos Blancos y se encontraba cumpliendo el turno tardero, esto es, pasaba un bus a buscarlo a eso de las 14:30 horas y regresaba del trabajo al otro día en la mañana, a eso de las 08:00 horas. Recuerda que ese día la casa estaba toda desordenada, con claras señales de haber sido allanada, ellos pensaron que se lo habían llevado para prestar declaración y luego se había ido a trabajar por lo que no le dieron mayor importancia, teniendo presente además que su padre era un trabajador, simpatizante del Partido Comunista, pero que nunca participaba de reuniones u otro tipo de manifestaciones de esa índole. Su madre y todos quedaron preocupados en la casa y comenzaron a pasar las horas, al día siguiente no llegó a la casa, fueron donde unos compañeros de trabajo quienes les dijeron que no había ido a trabajar y su madre se acercó a la Vicaría de la Solidaridad, en la Catedral de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Antofagasta, donde se enteró, con ayuda del Monseñor Oviedo Cavada, que a su padre se lo habían llevado al Grupo de Instrucción de Carabineros, ubicada en la intersección de las calles Matta esquina Rendic. Añadió que el día 2 o 3 de septiembre de 1974, llegaron dos Carabineros a la casa, quienes portaban uniformes distintivos los que no se identificaron, preguntando si era la casa de don Gumerindo Álvarez, recuerda que ella misma les abrió la puerta y les confirmó que ellos eran su familia. Que le informaron que su padre había ingresado al Hospital Regional Antofagasta y se encontraba en mal estado de salud. Después de recibir la noticia, su madre y uno de sus hermanos se trasladaron al Hospital, resultando que no estaba enfermo sino que había ingresado como N.N. a la morgue fallecido. Recuerda que su madre llegó con la noticia a la casa, diciéndoles que su padre no estaría más con ellos pues había fallecido y que podían ir a buscarlo al Hospital donde lo entregarían al día siguiente. Que al día siguiente, concurrió junto a su madre al Hospital Regional de la ciudad y recuerda que su padre estaba sobre una mesa, estaba totalmente golpeado, no tenía uñas en las manos ni en los pies, una marca en el cuello (como de alambre, muy fino, sin corte), vio que ya le habían realizado la autopsia. Después de vestirlo, tuvieron la oportunidad de llevar a su padre a la casa por unos instantes, procediendo a sepultarlo ese mismo día en horas de la tarde, quedando ubicado en el Cementerio General de Antofagasta.

A fojas 108, se aportó declaración de **Marta María González Castillo**, concuñada de la víctima, quien señaló que Gumerindo Álvarez trabajaba en Mantos Blancos, que en agosto de 1974, encontrándose en el casino de la Minera, señaló: "este gobierno no va a alcanzar el año" y al día siguiente fue detenido por carabineros de civil, el 30 de agosto de 1974. El día 2 de septiembre siguiente, lo encontraron muerto en el Hospital de Antofagasta y tenía unas marcas en el cuello, como si le hubiesen pasado un alambre por ahí. Fue retirado por su familia y sepultado en el Cementerio de Antofagasta.

A fojas 179, 238 y 2574, declaró **David Alberto Álvarez Segovia**, hijo de la víctima, quien señaló que su padre trabajaba en la empresa Mantos Blancos, que un día, en circunstancias que se encontraba en su domicilio, en horas de



la tarde, llegaron unos militares buscando a su padre, le llamó la atención que sus uniformes eran de color azul, quienes llegaron bruscamente a allanar su casa, registraron todas la habitaciones y se percató que llevaban armas. Recuerda que llevaban casco. Una vez que encontraron a su padre, lo mantuvieron para luego revisar cada una de las dependencias, menos unas piezas que estaban ubicadas hacia el lado sur donde su padre tenía unas personas allegadas, se trataba de un Carabinero amigo y su familia. Cuando terminaron la revisión de la casa, los militares se llevaron a su padre detenido. Su padre nunca regresó a la casa y su madre comenzó a buscarlo visitando diferentes lugares, hasta que pidió ayuda en la Catedral de la ciudad, donde fue ayudada, logrando ubicar el cuerpo sin vida de su padre en dependencias del Hospital Regional de Antofagasta. La versión que llegó a conocimiento de la familia, era que su padre se había suicidado, lo que pone en duda porque su padre no era una persona con características suicidas.

**NOVENO:** Que, a fojas 794 se tuvo a la vista la causa Rol N° 27.788 del 2° Juzgado del Crimen de Antofagasta, sobre suicidio de Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, donde constan las siguientes piezas de relevancia:

Acta de declaración que habría formulado Juan Latrille Fernández, de fojas 1, fechada el 2 de septiembre de 1974, ante el SICAR de la Prefectura de Antofagasta, donde relata ser efectivo que Álvarez profirió a viva voz palabras soeces en contra de la Junta Militar de Gobierno, señaló también que Álvarez era una persona de reconocida militancia comunista, y que no era primera vez que se le escuchaba vociferar ese tipo de expresiones. Al final de su declaración, estampa su dígito pulgar derecho y firma manualmente ratificando su declaración. Consta también un timbre y firma perteneciente a la sección SICAR de Carabineros de Antofagasta. A fojas 22 vta., del expediente, el 6 de enero de 1975, este sujeto ratificó dicha declaración.

A fojas 2 consta una declaración, que se atribuye a don Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, efectuada el 2 de septiembre de 1974 en calidad de detenido, donde se indica que libre y espontáneamente y sin apremios de ninguna naturaleza habría expresado lo siguiente: "Soy militante del ex-partido comunista desde el mes de julio del año 1973 y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



trabajo en la actualidad en la sección maestranza de la Empresa Minera de Mantos Blancos donde me desempeñé como maestro soldador. Que entre el día martes o miércoles de la semana comprendida entre el 19 al 25 de Agosto pasado, y mientras me encontraba en el turno de 08,00 a 16,00 horas, trabajando en la sección antes indicada, proferí a viva voz palabras soeces en contra de la Junta Militar de Gobierno como indico "QUE EN CHILE NO HAY CARNE; PERO QUE HABÍAN CUATRO VACAS EN EL PODER Y TENÍAN QUE SER CARNEADAS". Estas palabras las proferí en presencia de seis compañeros de trabajo que se encontraban en el lugar y con bastante indignación ya que con el dinero que gano en la Empresa no me alcanza ni para comer, además lancé lejos los documentos que tenía consigo. Agrego además que dije otras expresiones injuriosas en contra de las autoridades y principalmente a la Junta de Gobierno que por el momento no recuerdo cuales eran, sólo obedecía a que este gobierno sube las cosas principalmente los menesteres y los sueldos no aumentan de ninguna forma. Estas graves injurias que proferí las dije consciente a las consecuencias que soportaría y me acarrearían, eso sí que las decía porque en el lugar no había ningún uniformado y si alguno me denunciaba me sentía capaz de resistir tal ofensa porque era hombre para mis cosas. También lo hice con el propósito de que alguien me acompañara a dialogar, tal es el caso que el empleado Hugo González de la misma sección manifestaba que "LA JUNTA NO SE LA PODÍA PARA GOBERNAR YA QUE LE FALTABA PREPARACIÓN", además decía otras palabras que no recuerdo". Al final de su declaración, figura una huella dígito pulgar derecho y una firma ilegible. Consta también timbre y firma perteneciente a la sección SICAR de Carabineros de Antofagasta.

A fojas 3, se agregó Parte N°27, emitido por el Servicio de Inteligencia de Carabineros de Antofagasta (SICAR) el 2 de septiembre de 1974, dirigido al Segundo Juzgado del Crimen de Antofagasta, donde dan cuenta de suicidio de Gumerindo Álvarez Pizarro, ocurrido ese mismo día, a eso de las 19:00 horas, y de su derivación al Hospital Regional de Antofagasta, falleciendo en el trayecto. Informan que lo encontraron en el interior del calabozo N°2 del Grupo de Instrucción, sentado con la pierna derecha flectada y la cabeza inclinada hacia el lado derecho y apoyada en la pared



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

en estado inconsciente motivo por el cual el cabo Hugo Hermosilla Parodi solicitó la atención del Médico de Carabineros Dr. Drago Zlatar Ostojic quien se encontraba atendiendo al personal en esa Unidad, quien procedió a examinarlo encontrándole alrededor de su cuello un pedazo de lienzo y en estado agónico. Indican también que la detención de Álvarez se llevó a efecto el 29 de agosto de 1974, aproximadamente a las 17,15 horas, por personal del SICAR, "en atención a que dicho individuo había proferido graves ofensas en contra de la Honorable Junta Militar de Gobierno". Posteriormente el día 30 del mismo mes por medio del oficio Reservado N°228, solicitaron la prolongación de su detención al C.A.J.S.I. Constatada la muerte de Álvarez, por el médico de turno del Hospital Regional, se ordenó su traslado a la Morgue para su autopsia correspondiente. Refieren que el occiso vestía pantalón oscuro, camisa negra, chaleco plomo, vestón claro a cuadro, y zapatos café. Se adjuntó actas de declaración de Juan Latrille Hernández y de la víctima, ambas datadas el 2 de septiembre de 1974. Se indica que se acompañó al parte un tornillo de 1.1/2 pulgada de largo del cual pendía restos de lienzo que habría utilizado el detenido para atentar contra su vida. En la primera providencia de 3 de septiembre de 1974, que rola al reverso del parte, el juez Juan Enrique Sinn Bruno, dispuso que se hiciera la autopsia al cadáver, se practicara la inscripción de la defunción y dio orden de investigar, además se ordenó que se guardara el lienzo acompañado, sobre el tornillo, nada se indicó.

A fojas 5 consta certificado de defunción de don Gumerindo Álvarez, emitido el 4 de septiembre de 1974, donde se indica fecha de fallecimiento el 2 de septiembre de 1974, a las 19:10 horas en Antofagasta, con causa de muerte "Asfixia por ahorcamiento, paro cardíaco". A fojas 7 se agregó el Informe de Autopsia del occiso.

A fojas 9 el SICAR, el 16 de septiembre de 1974, remitió al tribunal una serie de documentos personales de la víctima.

A fojas 14 consta Oficio N°250, emitido por el SICAR de Antofagasta el 9 de septiembre de 1974, donde informan que la detención de Álvarez se llevó a efecto a las 17,15 horas, del 29 de agosto del mismo año, por el Cabo 1° Héctor Enrique Ovando, Cabo 1° Hugo Hermosilla Parodi y Cabo 2° Juan León Hernández, frente a su domicilio, por proferir graves ofensas



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

a la Junta de Gobierno en la sección maestranza del Mineral Mantos Blancos, en presencia de aproximadamente 10 personas, y hacen presente que la persona al momento de su detención infringía la Ley N°12.927, Título III, Art. 6° letra b) de Seguridad del Estado.

A fojas 16, consta Parte N°1059 de 17 de septiembre de 1974, emitido por la Prefectura de Antofagasta de la Dirección General de Investigaciones, donde dan respuesta a un decreto de investigación de 3 de septiembre del mismo año, sobre las averiguaciones efectuadas al interior del calabozo N°2 donde se encontró a Gumercindo Álvarez Pizarro, al respecto en ese informe se señala que se trata de un recinto de madera de muy pocas dimensiones, donde "se ven varias ranuras entre las tablas donde es factible colocar un tornillo o algo similar que sirva de apoyo o soporte de un vínculo, como ser alambre, género o inclusive cordel. Dicho calabozo también tiene poca ventilación y luz natural" y de entrevistas efectuadas a Hugo Hermosilla Parodi y al médico Drago Zlatar Ostojic.

**DÉCIMO:** Que, con los dichos de doña Luisa Elena Segovia Segovia, quien señaló su marido fue detenido el día jueves anterior al día en que prestó declaración, lo que ocurrió el martes tres de septiembre de 1974, de lo que se colige que la detención se practicó el jueves 29 de agosto de 1974, por sujetos de civil que se identificaron ante ella como pertenecientes al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, identificación falsa que no es de extrañar que se haya utilizado por tratarse del proceder habitual de los organismos de seguridad del régimen, tanto es así que ocultaban sus nombres y cargos incluso ante la autoridad judicial, lo que se aprecia en el parte policial de fojas 3, y en los oficios de fojas 9 y 14 de la causa Rol 27.788 del Segundo Juzgado antes aludida, donde un sujeto hace una firma sobre la sigla S.I.C.A.R., sin indicar nombre y cargo. Ese expediente, aún con las falencias que se harán notar más adelante, se trata de un instrumento público donde queda de manifiesto que la detención fue practicada por agentes del SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros), como expresamente lo reconocieron en el oficio N°250 de 9 de septiembre de 1974, que rola a fojas 14.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Del mismo expediente, no emana información alguna que la detención se haya practicado por orden de autoridad administrativa o judicial competente, salvo una mención a un oficio N°228 donde se habría solicitado una prolongación de su detención al CAJSI. El tribunal ordinario que tramitó esa causa, no efectuó averiguación alguna al respecto.

Además de los dichos de doña Luisa Segovia, están los dichos de los hijos de la víctima, doña Luisa Elizabeth Álvarez Segovia y don David Alberto Álvarez Segovia, quienes estaban presentes en el domicilio cuando detuvieron a su padre y si bien no existe gran concordancia en cuanto a la institución a la que pertenecían los captores, quizás motivados o confundidos por la identificación falsa que ellos realizaron, no queda duda que la detención la practicaron agentes del servicio especial de Carabineros que operaba, en esa época, en el Grupo de Instrucción donde este tribunal concurrió a efectuar la inspección personal del tribunal lo que consta a fojas 1567, el 18 de octubre de 2017, lugar donde se apreció lo que habría correspondido al calabozo número 2, además del sitio donde habrían estado ubicadas las oficinas que se utilizaban para efectuar los interrogatorios y el lugar donde funcionaba la clínica del Grupo de Instrucción, hasta donde habría sido trasladado el cuerpo, al parecer, moribundo de la víctima; digo al parecer, porque los dichos al respecto de **Segundo Raúl Contreras Riffo**, fueron absurdos y cambiantes, en el expediente Rol N°27.788 señaló que había fallecido en el trayecto hacia el Hospital y que el doctor de turno lo habría examinado y constatado su fallecimiento, dando la orden de su ingreso a la morgue, en el actual proceso señaló que el día de los hechos se encontraba de turno a cargo de la ambulancia de Carabineros, y a esa hora, el doctor Zlatar atendía las consultas en el Cuartel del Grupo de Instrucción de Carabineros, cuando uno de los funcionarios del SICAR, le manifestó que una persona del calabozo, sexo masculino, estaba ahorcándose, al que de inmediato sacaron del interior de dicho calabozo y lo trasladaron al policlínico donde atendía el Dr. Zlatar, quien al examinarlo, debido a que aún se encontraba con signos de vida, dispuso que fuera de inmediato trasladado al Hospital, lo que se cumplió en la propia ambulancia que había en el Grupo de Instrucción y que él lo acompañó, sin embargo acá



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

precisó que al llegar ingresaron al paciente en el servicio de Urgencia y luego fue derivado al tercer piso al área de Traumatología y en el trayecto, antes de subirlo al ascensor del mismo Hospital, la persona falleció, versión que resulta ilógica, porque no se entiende que alguien que estaba en tal estado de gravedad fuera derivado desde la unidad de urgencia a "traumatología". Ahora bien, eso tampoco fue investigado en el proceso aludido, aunque bastaba con oficiar al Hospital para obtener esa información.

**UNDÉCIMO:** Que, del mérito del expediente tantas veces citado y de los dichos de los hijos de la víctima, queda comprobado que el encierro de la víctima perduró hasta su muerte acaecida el día 2 de septiembre de 1974, según consta del parte policial de fojas 3 de ese proceso y de su certificado de defunción de fojas 5.

**DUODÉCIMO:** Que, de los dichos de los propios funcionarios que depusieron tanto en la causa seguida ante el Segundo Juzgado del Crimen de Antofagasta, como en este proceso se pudo comprobar que el SICAR de Carabineros de Antofagasta, era un órgano creado por la Prefectura de esa ciudad para perseguir a quienes consideraban enemigos del régimen militar.

Es así que a fojas 18 vta., de los autos Rol N°27.788 citado, **Héctor Enrique Ovando**, señaló que cuando ocurrió el suicidio de Gumerciendo Álvarez, él no se encontraba en la Unidad, se enteró de ello cuando ya había sido enviado al Hospital, donde falleció. En cuanto a la detención, manifiesta que efectivamente, junto al cabo Hugo Hermosilla Parodi y Juan León Hernández, lo detuvieron el 29 de agosto de 1974, a las 17,15 horas, frente a su domicilio, por haberse tenido conocimiento que este había injuriado a la Junta Militar de Gobierno en el Mineral de Mantos Blancos, Sección Maestranza, añadió que reconoció haber cometido tal hecho y para ello firmó una declaración. Estima que Álvarez se suicidó pensando que al haber reconocido que cometió injurias en contra del Gobierno Militar, le darían buen tiempo de cárcel y eso seguramente lo llevó a auto eliminarse. Agrega que no había otras causas. A fojas 189 y 241 de estos autos, declaró **Jiliberto Aliro Guerra Iriarte**, quien señaló que posterior a los hechos relativos al Carabinero Schimdt ocurridos entre el 11 y 12 de septiembre de 1973, se dispuso una serie de servicios especiales, tales



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRXS

como rondas de patrullajes en diferentes sectores de la ciudad y operativos conjuntos con la Fuerza Aérea, el Ejército, Investigaciones y Carabineros, resultando en ellos varias personas detenidas por personal de Carabineros, quiénes las trasladaban al Grupo de Instrucción, como procedimiento habitual de Carabineros, pues las otras instituciones participantes, llevaban sus detenidos a sus dependencias. Indica que existía un grupo de inteligencia de Carabineros, denominado SICAR, que se encargaba de realizar las detenciones de tipo político, que al parecer operaba en calle Matta esquina de calle Chuquisaca, frente del Grupo de Instrucción. A fojas 196 y 284, declaró **Rodolfo Segundo Rodríguez**, quien señaló que las detenciones de tipo político eran realizadas por el Servicio Inteligencia de Carabineros, quienes estaban encargados de ese tema conjuntamente con los servicios de Inteligencia de otras Instituciones. Refirió que solo el SICAR participaba en detenciones, y conocía de vista a los que lo formaban, Madariaga, Núñez, León, Pavez, no recuerda más. A fojas 409 y 493, y careo de fojas 939, **Eduardo Bacilio Brito Siade**, señaló que existía un Servicio de Inteligencia de Carabineros, que estaba a cargo del Teniente Eduardo Aguilar Valdés, con un grupo de Carabineros, funcionaban donde estaba el Grupo de Instrucción, añadió que ese grupo no trabajó con la Fiscalía de Carabineros, no se les entregaban órdenes de investigar y mucho menos órdenes de detención y nunca supo lo que hicieron ellos. A fojas 428 y 486, y careo de fojas 863, declaró **Carlos Alberto Torres Vergara**, quien señaló que a partir del Pronunciamiento Militar, se creó el Servicio de Inteligencia de Carabineros, que estaba a cargo del Capitán Eduardo Aguilar Valdés, y ese grupo estaba conformado entre otros por el Cabo Ovando, un Cabo Villanueva Zeballos, primeramente trabajaron en dependencias del Grupo de Formación Policial y luego pasaron a ocupar dependencias al lado de la Iglesia Divina Providencia en la intersección de las calles Matta con Chuquisaca de Antofagasta, desconociendo los motivos por los cuales tomaban detenidos. A fojas 431 y 482, y careo de fojas 860, **Vinzenz Edwin Muñoz Carrasco**, señaló que el 11 de septiembre de 1973, se formó el SICAR, Servicio de Inteligencia de Carabineros, que quedó a cargo del Capitán Eduardo Aguilar Valdés, quien reclutó en la misma Comisaría a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBR SX

los integrantes de ese grupo, comenzó con los que pertenecían a la Comisión Civil, recordando al Sargento Ovando, al Cabo 1º Pajkuris, otro de apellido León y el resto no recuerda sus nombres, pero los primeros días funcionó en el Grupo de Instrucción y después pasó a funcionar en el Divina Providencia; expuso que llegaban con detenidos a la Tercera Comisaría y eran ingresados, pero desconoce los motivos de sus detenciones, se rumoreaba que se trataba de temas políticos. A fojas 436, 484 y 2370, y careo de fojas 861, **Jaime Dagoberto Rodríguez Quiroga**, expresó que un Teniente le notificó que se tenía que integrar al Servicio de Inteligencia de Carabineros SICAR, que en un principio funcionaba en el subterráneo de la Tercera Comisaría. A su llegada se percató que el jefe del Servicio era el Capitán Aguilar Valdés, estando como segundo, el Teniente Ricardo Lillo Morandé. Entre sus compañeros recuerda a Juan René Ramírez Ruz, Osvaldo Canto Aguayo, Héctor Enrique Ovando, José Miguel Soto Ampuero, Alfredo Enrique Vega Ramos, Juan Arturo León Hernández, quienes eran de dotación de la Tercera Comisaría. Además había personal de la Segunda Comisaría, entre ellos recuerda a Ismael Riveros Cuello, Héctor Araya Sepúlveda, Luis Alberto Núñez Jara y Hugo Lupercio Hermosilla Parodi. Estaban divididos en agrupaciones, estando en su patrulla Alfredo Vega, José Soto Ampuero, Juan Ramírez Ruz y él, para tal efecto tenían asignado un vehículo, se trataba de una camioneta marca Chevrolet, modelo Van, al parecer propiedad de SOQUIMICH y era utilizada para transporte de personal, conducido por Alfredo Vega o Soto Ampuero, su función principal era transportar a los detenidos, se organizaban operativos, donde resultaban personas detenidas y las trasladaban al Grupo de Instrucción de Carabineros, donde eran interrogados por el Jefe del SICAR, el Capitán Eduardo Aguilar Valdés. El Grupo de Instrucción estaba ubicado en la intersección de las calles Matta esquina Rendic de Antofagasta. Explica que una vez detenida una persona era trasladada al Grupo de Instrucción, donde la esperaba el grupo interrogador a cargo de los oficiales y Sargentos más antiguos, en compañía del escribiente Canto Aguayo, quien tomaba nota de todo lo que declaraban las personas y nunca supo qué pasaba con los detenidos después del interrogatorio. Hace presente que en los operativos siempre iba una persona



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

más antigua del Servicio, quien manejaba toda la información, esto es, el nombre de la persona requerida y otros antecedentes necesarios para su ubicación, desconociendo completamente si existían órdenes de detención emitidas por el Tribunal o la Fiscalía Militar, pero se imagina que se contaba con orden, pues se hacían operativos conjuntos con otros servicios de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el Ejército y Carabineros. Todos los detenidos que se ubicaban eran dejados en el Grupo de Instrucción, donde les hacían el ingreso y ellos estaban encargados de informar a los familiares dónde podían visitarlos. Explica que cuando estaba Aguilar Valdés, participaba de los interrogatorios, que trasladaban a los detenidos desde su domicilio al Grupo de Instrucción y que allí también habían calabozos pequeños que estaban como a 10 o 15 metros de las salas de interrogatorios, donde los detenidos no estaban esposados, pero sí sentados. A fojas 439 y 485, y careo de fojas 862, declaró **Miguel Ángel Zamora Hurtado**, quien señaló que en las dependencias del Grupo de Instrucción funcionaba el Servicio de Inteligencia de Carabineros SICAR, bajo el mando del Capitán Eduardo Aguilar Valdés, en compañía del Teniente Lillo Morandé, con una dotación de 15 personas aproximadamente, pues en ese grupo se juntaron todas las Comisiones Civiles de la unidades de la Prefectura. A fojas 523 y 554 vta., declaró **Sergio Andrés Pedraza Tapia**, quien señaló que a partir del Pronunciamiento Militar, se les asignó una oficina a las unidades de Inteligencia de Carabineros (SICAR) y también había personal de inteligencia del Ejército, unos 10 funcionarios que vestían de civil, logrando observar que su función era detener personas que trasladaban al Grupo de Instrucción, donde realizaban los interrogatorios, percibiendo que en algunas oportunidades realizaban diligencias con los detenidos fuera del recinto policial. Señala que trabajaba solamente de día, nunca presencié alguna tortura o malos tratos a los detenidos, pero hace presente que se retiraba a las 20:00 horas a su domicilio particular, desconociendo lo que ocurría en horas de la noche, además porque en esa fecha había alumnos en la Escuela, a quienes debían cuidar evitando que tomaran contacto, tanto con el personal de Inteligencia y con los detenidos. Agregó que el Jefe era su Capitán Eduardo Aguilar



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



Valdés, además había dos oficiales, el Teniente Varas y el Teniente Lillo, quienes cumplían funciones como instructores, entre los Suboficiales recuerda a uno de apellido Galdames, otro de apellido Villanueva Ceballos, Solís Paredes, Juan Bautista Araya, José Jiménez Hernández, el Suboficial Mayor Juan Osorio Caro y Segundo Contreras Riffo, que era el practicante de enfermería. Señala que al Grupo de Instrucción de Antofagasta llegaron muchas personas detenidas, sobre todo los primeros días después del 11 de septiembre. Hace presente que fue dispuesto por el mando del Grupo o las autoridades de la época, que se le entregara al SICAR habitaciones para que ellos instalaran sus oficinas. Agrega que durante un largo tiempo llegaban detenidos y que interrogaba ese Grupo de SICAR, siendo ellos los encargados de los detenidos. A fojas 525, 553, 909, 1593, en reconstitución de escena de fojas 1567 y a fojas 25 de la causa Rol N°27.788 tenida a la vista, declaró **Segundo Raúl Contreras Riffo**, quien, en síntesis, señaló que trabajaba en el Grupo de Instrucción de Antofagasta, siendo el Jefe de Unidad el Capitán Eduardo Aguilar Valdés. Que después del 11 de septiembre de 1973, llegó el SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros) a trabajar al Grupo de Formación Policial, quienes andaban de civil y se movilizaban en vehículos y, a partir de ese momento, comenzaron a llevar personas detenidas al Grupo de Instrucción, donde eran interrogadas. Hace presente que todos los funcionarios estaban acuartelados y prácticamente vivían en el Grupo, los detenidos eran cuidados por los funcionarios del SICAR, desconociendo la cantidad de funcionarios que trabajaban en ese grupo. Expresa que todos los funcionarios del SICAR eran personas con las cuales no se podía hablar, eran intocables, amos y señores de sus cometidos y nunca daban cuenta de sus actos. A fojas 671, declaró **Luis Armando Varas Zúñiga**, quien señaló que al interior del Grupo de Instrucción funcionaba el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), siendo su función principal detener personas que eran interrogadas en el lugar por temas políticos. Refiere que el Jefe del Grupo de Instrucción en 1973 era un Mayor de apellido Gutiérrez y después estuvo Aguilar Valdés. A fojas 690, 742, 1679, 2550, y en careo de fojas 940, declaró **José Luis Villanueva Zeballos**, quien señaló que estuvo en el SICAR hasta septiembre u octubre de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRXS

1974, aproximadamente, coincidiendo su salida con la del Capitán Eduardo Aguilar Valdés, que funcionaban en el Grupo de Instrucción. Recuerda como integrantes para 1974 a Ovando, el Teniente Lillo, el Capitán Aguilar Valdés. Recuerda a Juan León Hernández, a quien le decían el "Cachorro". También a Juan Ramírez Ruz, a Ismael Riveros "el Cachuta", quien era de la comisión civil. Indica que se mezclaban los detenidos por razones políticas con los detenidos por delitos comunes. Recuerda a Hermosilla, pero no sabe si estuvo con él, le parece que él estaba en la comisión civil. Los de la comisión civil estaban mezclados con ellos. Le parece que Hermosilla era de otra unidad y estaba agregado en el Grupo de Instrucción. Afirma que en el SICAR había personal militar del Servicio de Inteligencia y de la Fuerza Aérea. Pese a que trabajó en el Grupo como Instructor, no recuerda a alguien fallecido ahí. Refiere que los calabozos quedaban ubicados muy cerca de la guardia. Cree que eran una especie de "calabozo militar", ocupados anteriormente para ellos cuando cometían faltas. Sostiene que sí se dejaron detenidos en ese lugar fue porque era el lugar más seguro donde podían estar. Afirma que no había oficina ahí. Hubo un enfermero de ganado que no tenía oficina. Agrega que el Capitán Aguilar Valdés estuvo como Jefe del SICAR y luego, a finales de agosto de 1974 al parecer, llegó Wladimiro Cuadra (fallecido), pues Aguilar fue trasladado como jefe del Grupo de Instrucción, saliendo del SICAR y volviendo a la 3º Comisaría. Añade que el Teniente Ricardo Lillo, quien era el segundo en grado, tendría que haber subrogado a Aguilar cuando este se ausentaba. Refiere que llegaban órdenes al SICAR para detener personas y salían a los operativos, muchas veces le tocó participar. Afirma que Ovando era el brazo derecho de Lillo y Aguilar, estaba en antecedentes de todos los procedimientos de los detenidos. Afirma que las órdenes de detención las daban el capitán y el teniente Lillo, pues ellos mandaban. A fojas 969 y 1691 **José Job Jiménez Hernández**, declaró que en el Grupo de Instrucción estaba la SICAR, que era el Servicio de Inteligencia de Carabineros y era una entidad completamente autónoma, cuyas funciones y personal eran totalmente aparte del personal del Grupo de Instrucción, salvo el Capitán Valdés, quién era el Jefe de ese Servicio y en cuanto al personal de la SICAR, recuerda al Negro Ovando,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Ramírez Ruz, a León. Expuso que las veces que cumplió guardia en el Grupo, muchas veces el personal de la SICAR salían e ingresaban a pie y en vehículo, ignorando a quienes llevaban en los vehículos. Recuerda que en el período que estuvo en el Grupo, un día que estaba de guardia, tomó conocimiento que un civil que estaba en el calabozo de la SICAR estaba lesionado, al cabo de unos minutos llegó la ambulancia de Carabineros y posteriormente salieron y de ello no supo nada más. Fue uno de los miembros del SICAR a verlo y salió corriendo avisando que había que trasladar al detenido. Les dijeron que se había lesionado. Después comentaron que se ahorcó con la pretina del pantalón. Explica que él permaneció desde abril de 1974 al año 1975 en el Grupo de Instrucción. Desconoce quién quedaba a cargo del SICAR cuando Aguilar no estaba, pero que debe haber sido el Teniente Lillo o alguno de sus integrantes. Refiere que el Grupo tenía un servicio médico, luego la instrucción del Grupo, luego un garaje, los calabozos y posteriormente cocina, casino, peluquería, canchas. Las oficinas del SICAR estaban al fondo en unas oficinas pasando los baños. Señala que no vio militares en el Grupo de Instrucción. A fojas 1597 y 2347 declaró **Juan René Ramírez Ruz**, quien señaló que en octubre o noviembre de 1973 fue destinado al SICAR. En ese momento ya estaban en el Grupo Eduardo Aguilar Valdés, quien estaba a cargo del SICAR, Lillo, Del Río, el escribiente Díaz, Villanueva, Ovando, no recuerda si Luis Núñez Jara ya estaba o llegó después, al igual que Jaime Rodríguez Quiroga, a quien le decían "el Cocoya". Asimismo, recuerda a Riveros a quien le decían "el Cachuta". Cree que Hugo Hermosilla Parodi llegó al tiempo después. Explica que hacia el final del Grupo de Instrucción había unos calabozos revestidos de madera, luego una multicancha. El SICAR funcionaba en unas dependencias del enfermero de ganaderos. Había un bebedero de caballos y al lado unas salas donde interrogaban a las personas, quedando a la espera de ser interrogados en unas bodegas de forraje que estaban un poco más atrás de estas salas que hacían las veces de "clínicas veterinarias". Señaló que él realizaba labores de detención de personas y custodia pero no interrogaba porque estaba para "los mandados". En los calabozos dejaban a los detenidos, pero nunca fueron más de dos detenidos. Recuerda el suicidio de una persona al interior del calabozo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

2 del Grupo de Instrucción de Antofagasta, a quien vio con la pretina del pantalón en el cuello, adentro de un calabozo. Añade que Ovando era el cabo 1º de confianza que tenían los oficiales y estaban todos ese día en el Grupo de Instrucción, incluyendo a Lillo. Estaba también ese día el famoso "Cachorro" Juan León Hernández. Refiere que a Lillo y Ovando los conoció de la sección radio patrullas y eran "yuntas", que Ovando fue trasladado al SICAR como Cabo de confianza de Lillo. Señala que la Sala de Interrogatorio en el Grupo de Instrucción quedaba a aproximadamente 25 metros de los calabozos. Que Lillo era el siguiente al mando porque era el más antiguo después del Capitán, si no era él, era el Teniente Orlando del Río. A fojas 1740, se compulsó declaración policial de **Juan Antonio Villalobos Concha**, quien manifestó que en el año 1973 se desempeñó como Oficial de Instrucción en el Grupo de Instrucción de Antofagasta. Esta Unidad estaba al mando del mayor Beda Orlando Gutiérrez Pincheira y contaba con una dotación de dos Oficiales Instructores que era el Teniente César Antonio Delgado Estrada y él, secundados por cuatro funcionarios de la Planta de Suboficiales. Que el día 11 de septiembre de ese año, en horas de la tarde, llegaron hasta esa Unidad Policial cinco personas al mando del Capitán Eduardo Aguilar Valdés, quien era acompañado por los Tenientes Ricardo Lillo Morandé y otro de apellido Del Río, Subteniente Julio Bahamondes Quevedo y un civil que pertenecía a Patria y Libertad. Este grupo formó la SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros), quienes utilizaron las dependencias donde estaba el forraje de los caballos, lugar al que llevaron numerosas personas detenidas. Se percató que en ese lugar se realizaron torturas, ya que en varias oportunidades observó personas colgadas desde sus manos o personas tendidas a pleno sol en el suelo, como también a una persona con signos de haber sido golpeada. Él fue dado de baja el 13 de noviembre de 1973.

De todos esos dichos se acredita, asimismo, que el SICAR a la época de ocurrencia de los hechos investigados en este proceso funcionaba en el Grupo de Instrucción de Carabineros.

**EN CUANTO AL GRAVE DAÑO:**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

**DECIMO TERCERO:** Que habiéndose demostrado que el SICAR de Carabineros detuvo en su domicilio a don Gumercindo del Carmen Álvarez Pizarro siendo trasladado al Grupo de Instrucción de Carabineros ubicado en la calle Matta de Antofagasta, donde fue interrogado y mantenido bajo custodia de los mismos agentes, en cuyo lugar habría fallecido, y según la versión de la época respaldada por el protocolo de autopsia practicado el 4 de septiembre de 1974 por el médico Mamerto Gorena en la Morgue del Hospital de Antofagasta, que rola a fojas 7 de la causa a la vista Rol N°27.788, N°83/74 cuya data es el 6 de septiembre de 1974, donde se indica que: "en la Morgue del Hospital Base Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, practicó la autopsia del cadáver de Gumercindo del Carmen Álvarez Pizarro, determinando como causa de la muerte "Asfixia por ahorcamiento", informando, además, la existencia de un paro cardíaco e "Intensa cianosis de órganos abdominales y torácicos". Se indica que en el examen externo, se constató que corresponde a: "Cadáver de sexo masculino de 45 años de edad. Regular estado nutritivo. Fue enviado envuelto en sábanas. Cabeza: Con abundante cabello negro. Cara: Labios cianóticos. Hiperemia de las conjuntivas. En cuello se aprecia surco de compresión de 4 milímetros de ancho, al parecer producido por cordel, más acentuado en su parte anterior lado derecho. Expresa que "en el resto del cuerpo no se aprecian lesiones recientes ni secuelas que indiquen acción de terceros". Asimismo, respecto al examen interno, constata "Órganos del cuello: Esófago: Mucosa lisa muy cianótica. Faringe: Con intensa hiperemia. Laringe: Con deformación e infiltración hemorrágica en correspondencia a la zona de compresión. Tórax: Bronquios muy cianóticos. Pulmones: Ambos con punteado hemorrágico. Al corte intensa hiperemia pasiva del parénquima. Corazón: Algo aumentado de volumen. Pericardio: liso brillante. Miocardio, muy cianótico. Endocardio, sin vicios valvulares. Coronarias con manchas lipoideas. Abdomen: Hígado: Tamaño normal. Superficie lisa. Parénquima con intensa cianosis. Al corte escurre sangre de color oscuro. Estómago: Tamaño normal. Cavidad con escasa secreción mucosa. Intestino: Sin alteraciones. Bazo: Tamaño normal. Muy cianótico. Riñones: Tamaño normal. Superficie lisa. Parénquima de color rojo oscuro azulado por la cianosis".



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Llama la atención la conclusión a la que arriba la autopsia de no existir otras lesiones recientes ni secuelas que indiquen acción de terceros, atendido lo que expresó su hija Doña Nally Álvarez Segovia, a fojas 58 sobre lo que percibió cuando concurrió a vestir a su padre al Hospital, respecto de que no tenía ninguna uña en sus manos, y detrás de sus oídos estaba muy morado, al igual que los lechos unguales y en el cuello presentaba evidencia de ahorcamiento, correspondiente a una lesión muy marcada que no era ascendente; también refirió que vio que en las axilas tenía quemado, al parecer producto de la aplicación de corriente eléctrica. Expuso también que le comentaron en ese momento que su padre tenía sus testículos quemados. A fojas 60, doña Luisa Álvarez Segovia declaró haber visto en el cajón a su padre con las señales físicas referidas precedentemente. A fojas 177, don Gumerindo del Pilar Álvarez Segovia, quien acompañó a su madre a reconocer a su padre a la morgue, declaró que pudo ver a su padre, estaba sobre una camilla metálica, tenía desde la cadera hacia arriba descubierto y el resto hacia abajo estaba tapado con una sábana color blanca, en el cuello tenía un surco muy marcado, que abarcaba toda la parte delantera del cuello, le dio la impresión que no era ascendente, aunque no pudo verlo hacia la parte posterior del cuello. Además tenía varios moretones circulares, grandes, como el porte de un puño de la mano, ubicados en tórax y abdomen, situación que le dejó muy impresionado. A fojas 181, doña Mercedes del Rosario Álvarez Segovia, manifestó que observó en su padre un cuerpo totalmente golpeado, le faltaban algunas uñas de los dedos de las manos, algunos quemados y tenía una marca en el cuello como si algo fino le había apretado esa zona, que según el certificado de defunción falleció por asfixia, pero no presentaba ninguna evidencia de los cuerpos en esa condición, es decir, no tenía la lengua afuera o morada, caso típico de los suicidios por ahorcamiento. A fojas 179, David Alberto Álvarez Segovia manifestó que pudo ver el cuerpo de su padre cuando lo estaban velando en la casa, percatándose que tenía heridas en el cuello, se trataba de una lesión similar a un surco, de color rojo, que se podía observar sólo en la parte delantera.

Como puede apreciarse al menos dos de los hijos de la víctima tuvieron la posibilidad de apreciar físicamente el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

estado en que se encontraba su padre, porque uno de ellos, Gumeriendo, acompañó a su madre cuando les anunciaron que estaba en el Hospital, los mismos carabineros que fueron hasta su domicilio, lo que ocurrió el día 3 de septiembre de 1973, y la otra hija doña Nally Álvarez Segovia, cuando concurrió a vestirlo, lo que aconteció después del 4 de septiembre, porque según el informe de autopsia este procedimiento se realizó precisamente el día 4 de septiembre de 1973 y, ambos testigos presenciales, pudieron percibir por sus sentidos que su padre tenía las lesiones que figuran en sus testimonios, lo que contradice el informe evacuado por Mamerto Gorena.

El informe del legista de la época, según el Servicio Médico Legal, que fue analizado a través del Informe Pericial Médico Forense de fojas 1033 y siguientes, concluyó que: "en atención al análisis del protocolo de autopsia del Sr. Gumeriendo del Carmen Álvarez Pizarro, la causa de su muerte corresponde a una compresión cervical extrínseca, no pudiendo determinar si ésta es producto de una asfixia por ahorcamiento o de una estrangulación por lazo, ya que el protocolo de autopsia está incompleto y no detalla adecuadamente las lesiones cervicales, así como tampoco se tiene a la vista el informe científico-técnico del sitio del suceso primario ni antecedentes oficiales que permitan contextualizar su muerte". Además de lo anterior se estableció que en los restos mortales de la víctima exhumados y periciados en su oportunidad, "se identificaron lesiones perimortem en la parrilla costal izquierda, que sugieren la existencia de traumatismos contusos **recientes y coétaneos con la causa de muerte**". Resulta evidente que respecto de esas lesiones que el doctor Mamerto Gorena "no advirtió", se pudo constatar que el cuerpo externamente presentaba golpes, lo que coincide con lo percibido por los hijos de la víctima. Las conclusiones del informe antes aludido deben complementarse con el Informe Pericial Antropológico de fojas 1056 y siguientes, el cual en sus conclusiones refiere que: "Como lesiones perimortem se observó un conjunto de fracturas en parrilla costal izquierda, en la región inferior, afectando las piezas 10°, 11° y 12°. Los traumas son compatibles con lesiones de baja energía, vale decir, traumas contusos, probablemente producto de golpes directos". Ese



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

informe también constató otro factor bastante decidor al momento de inclinarse sobre la veracidad de lo que suscribió el médico Gorena y lo que dicen haber visto sus hijos, doña Nally y doña Mercedes, quienes sostuvieron que a su padre le habían sacado las uñas de las manos, una señaló que le faltaban todas y la segunda que algunas, esa circunstancia coincide con el Informe Pericial Médico Forense de fojas 1033 y siguientes, donde se estableció en la letra c) del acápite titulado "Resultados", que en el inventario señala la presencia de uñas: 2 fanéreos derechos y 4 izquierdos recuperadas en asociación a miembros superiores y 4 fanéreos izquierdo en asociación con extremidades inferiores", es decir, entre los restos óseos de la víctima, no se encontraron cuatro uñas o fanéreos de las manos y seis de los pies, lo que hace atendible las lesiones que dicen haber visto las hijas del afectado.

De esta manera, resulta más creíble la versión de los hijos de la víctima que lo aseverado por el legista en su informe; sin entrar a hurgar sobre las causas que tuvo el médico para falsear los datos de la autopsia, esto es, si ello se debió a su inexperiencia o a su complicidad con el nuevo régimen y las actuaciones de sus organismos de seguridad o, simplemente, al temor de sufrir las consecuencias de dejar en evidencia las torturas a las que dichos organismos sometían a los detenidos por razones políticas.

Respecto de las falencias que anotó el Servicio Médico legal, sobre la omisión del informe científico-técnico del sitio del suceso primario ni antecedentes oficiales que permitan contextualizar su muerte, es un antecedente que debió recabar el juez sustanciador de la causa Rol N°27.788, sin embargo, éste no se apersonó en el calabozo para establecer el lugar preciso en que se pudo colocar el tornillo para sujetar el vínculo que habría sido usado para el ahorcamiento, tampoco hizo llegar a la morgue el "lienzo", que le habrían remitido junto al parte denuncia, para que el médico que practicó la autopsia determinase su correlación con la lesión que la víctima presentaba, le bastó con entregar esa diligencia a la Policía de Investigaciones, organismo que efectuó un informe basándose en lo que le informaron los propios agentes del SICAR.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



**DECIMO CUARTO:** Que, ante todas esas deficiencias o irregularidades que presentó la autopsia efectuada por el doctor Gorena, surgen amplias dudas respecto de la causa real del fallecimiento y así lo estableció el informe del Servicio Médico Legal citado en el motivo precedente, el que concluye que: "No es posible determinar si el fallecimiento corresponde a una forma médico-legal suicida u homicida. Cabe señalar que no todas las asfixias por ahorcamiento son de forma médico-legal suicida". Asimismo, en Informe de ampliación de fojas 1519 y siguientes, se indica que: "la cianosis no es un signo exclusivo de las asfixias por ahorcamiento, si no que se puede objetivar en otras muertes asfícticas así como en causas de muertes de otra etiología". Agregó que las otras lesiones (fracturas costales) presentes en los restos óseos asociados a la víctima Gumercindo Álvarez Pizarro, podría atribuirse al período convulsivo de la asfixia, sin embargo, **descarta** dicha posibilidad ya que esas lesiones se producen en zonas salientes del cuerpo y no en la zona dorso-lumbar, como es el caso de la víctima de autos. Por tanto, concluye que las fracturas costales encontrados en los restos óseos de Gumercindo Álvarez, "NO son atribuibles a una asfixia por ahorcamiento o estrangulación por lazo".

En ese informe también se expresan dudas respecto del vínculo utilizado, llamándole la atención que "en el parte de Carabineros se explicita que se remite el vínculo utilizado por la víctima, sin que se tengan antecedentes de éste pues no se describe en el protocolo de autopsia tenido a la vista. De igual forma, en la documentación tenida a la vista, se hace relación al vínculo indistintamente como "lienzo" (parte policial), posible cordel (autopsia) o cuerda (declaración), sin que quede clara la naturaleza de éste". Incluso si uno puede auscultar con algún detenimiento las versiones entregadas por los testigos, algunos de ellos hablan sobre la utilización como vínculo de la "pretina del pantalón", (José Job Jiménez Hernández) aunque refirió que eso es difícil de creer, porque es muy complejo desarmar la pretina del pantalón y además porque si uno no tiene nada que ver, debe estar muy desesperado para ahorcarse de esa manera. Además este testigo indicó que: "Cree que la versión de que el detenido tomó un tornillo desde el patio para ahorcarse, le parece infantil porque no se puede descuidar a un detenido al



sacarlo al patio ni permitir que se agache a recoger algún elemento, además el tornillo para poder meterlo en esa madera con las manos debe haber sido enorme, porque era madera dura de pino oregón, la que además estaba pintada. En su guardia, jamás vio que al detenido se le sacara a pasear y ese día que estuvo de guardia tampoco vio que sacaran a ese detenido al patio"; por su parte, Juan Ramírez Ruz, señaló que lo vio con la pretina del pantalón en el cuello, adentro de un calabozo; añadió que: "El cabo Ovando salió de la oficina de interrogatorios y le ordena que saque al detenido que estaba en el calabozo 2. Sacó el pestillo grande que había en el calabozo, ingresa y ve a una persona sentada, le dice que se levante y no se levanta. Le vuelve a decir y no se levanta. Mira hacia arriba y ve un tornillo grande y se percata que esta persona estaba con la pretina del pantalón puesta alrededor del cuello. Le impactó, dando aviso al señor Ovando u otra persona, diciendo que este sujeto al parecer estaba muerto. Recuerda que sacaron a esta persona en una camilla y lo revisó el Doctor Zlatar". Este testigo se contradice con lo expresado por el otro funcionario SICAR que depuso el 8 de noviembre de 1974 a fojas 18 de los autos Rol N°27.788, Hugo Ruperto Hermosilla Parodi, quien sostuvo que el 2 de septiembre de ese año, en circunstancias que fue a sacar al detenido Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro para trasladarlo a la cárcel pública de esta ciudad, lo encontró en estado inconsciente en la posición que se indica en el parte de fs. 3. Más adelante señaló que: "inmediatamente se llamó al médico Sr. Drago Zlatar que estaba en atención médica de los funcionarios de la Unidad, quien concurrió al lugar y constató el estado agónico del detenido, ordenando de inmediato el traslado al Hospital". Este sujeto no se refiere a la pretina del pantalón que mencionó Ramírez, sino a un pedazo de lienzo que estaba colgando de un tornillo de una y media pulgada, señalando que el "lienzo" debió recogerlo cuando pasaba al servicio higiénico. Raúl Contreras Riffo, a fojas 25 de ese expediente, señaló que cuando él concurrió al calabozo ya le habían sacado "la cuerda" y el médico Zdravko Drago Zlatar Ostojic, a fojas 27 señaló que el día de los hechos mientras se desempeñaba en su trabajo habitual en el policlínico del Grupo de Instrucción de Carabineros, se percató que llamaron al practicante Segundo Contreras que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

estaba colaborando en su trabajo, y luego llevaron a enfermería a un ciudadano que tenía con francos signos de asfixia y "con un cordón trenzado en el cuello" lo que indicaba que había tratado de ahorcarse.

En base a esa disparidad de relatos, efectuados durante el desarrollo del proceso y lo que emana de la causa Rol N° 27.788 tantas veces aludida, es que el informe pericial de fojas 1033 y siguientes, antes aludido, refirió que: "en atención a los escasos antecedentes que se disponen del sitio del suceso, los cuáles básicamente se restringen a declaraciones de un solo testigo, el cual traslada el cuerpo ya manipulado de la víctima hacia un centro asistencial (no es quien primariamente lo encuentra al interior del calabozo) y, al parte de Carabineros que da cuenta del fallecimiento del Sr. Álvarez Pizarro al interior de una celda, con un vínculo tipo "lienzo" del cual no se detalla ninguna característica, cuyo punto fijo habría sido un tornillo "sobrepuesto" en una pared, a una distancia incierta del piso, no es posible pronunciarse en relación a discriminar entre una asfixia por ahorcamiento o una estrangulación por lazo, así como tampoco es posible tener la certeza de la forma médico-legal suicida vs homicida, ya que la nueva documentación remitida no aporta antecedentes científico-técnicos objetivos del caso".

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en el mismo sentido, consultado el Servicio Médico Legal acerca del paro cardíaco que se describe en la autopsia efectuada en la causa Rol N°27.788 del Segundo Juzgado del Crimen de Antofagasta, en la ampliación del informe antes citado se indicó que al no tener certeza diagnóstica de la causa de la muerte entre un ahorcamiento versus una estrangulación por lazo, el paro cardíaco NO necesariamente es una consecuencia de la asfixia por ahorcamiento, toda vez que no se tiene certeza de que ésta sea la causa originaria de su defunción.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, en el proceso Rol N° 27.788 tantas veces citado, además de las falencias ya apuntadas, sorprende que para el juez de la causa no fuera algo inusual y no se cuestionara los motivos de la detención, la circunstancia de haber tenido bajo su poder y en calidad de detenido, o secuestrado a don Gumerindo Álvarez, y que recién cuatro días después de la detención, sin previa orden judicial,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

apareciera el día 2 de septiembre de 1973 tomándosele una declaración, respecto de la cual, el funcionario Hermosilla Parodi, indicó que: "lo habría sacado del calabozo durante la tarde para llevarlo a firmar la declaración" (sic). Obviamente el señalado juez tampoco se representó que esa firma y huella digital no le correspondiera, porque pudiendo hacerlo, no le consultó al respecto a la viuda, quien concurrió al tribunal y declaró el día 3 de septiembre. Ella pidió que le devolvieran los documentos de identidad y se limitó a pedir que se los remitieran.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, de lo que se ha venido analizando, aparece meridianamente claro que cualquiera haya sido la causa de la muerte, ya sea que la víctima se haya auto eliminado -lo que como se dijo es muy cuestionable-, o haya sido estrangulado, lo cierto es que fue detenido sin orden y llevado al Grupo de Instrucción de Carabineros, donde fue gravemente torturado, tanto es así que le causaron las fracturas de la parrilla costal y las demás lesiones que pudieron percibir sus hijos, todo lo cual, permite tener por acreditado, sin lugar a dudas, el grave daño que sufrió la víctima.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, a mayor abundamiento, los procedimientos interrogatorios a través de las torturas que los funcionarios del SICAR les aplicaban a los detenidos por razones políticas, que se demostró con los asertos de sus hijos que vieron el cuerpo golpeado, quemado y sin uñas, se ratifican con los testimonios de Carlos Peña Brunes a fojas 1630, Manuel Cangana Araya a fojas 1651 y 1716, Bladimir Semeria Solar a fojas 1654 y 1714, y Eduardo Cuevas Cuevas a fojas 1657 y 1712, quienes relataron torturas sufridas a manos de funcionarios del SICAR en el mismo Grupo de Instrucción pocas semanas antes de los hechos de autos, incluso con aplicación de corriente en distintas partes del cuerpo.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, con la prueba aludida en los motivos precedentes, consistente en instrumentos públicos, declaraciones de testigos, presenciales y de oídas, y diligencia de reconstitución de escena, según se ha venido analizando en cada caso, se ha demostrado fehacientemente que la víctima don Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, fue detenida el 29 de agosto de 1974 en su domicilio de la ciudad de Antofagasta, por los funcionarios del Servicio de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Inteligencia de Carabineros (SICAR) de dicha ciudad, quienes lo trasladaron a dependencias del Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta donde dicho Servicio tenía sus instalaciones. En este lugar permaneció hasta el 2 de septiembre de 1974, fecha en que habría sido hallado ahorcado en uno de los calabozos del SICAR, circunstancia que, como también se estableció, representa muchas dudas para creer en la veracidad de la versión de los captores, quienes pudieron inventar incluso el ahorcamiento, dadas las encontradas versiones que surgieron desde la investigación efectuada en la época, sobre todo respecto del vínculo que se habría empleado. En ese entonces, tanto el Grupo de Instrucción como el SICAR se encontraban a cargo del Capitán Eduardo Julio Aguilar Valdés (fallecido), siendo secundado a su vez por el Teniente Ricardo Lillo Morandé, quien además era jefe subrogante del Servicio. Se logró acreditar que durante la detención, según propia versión de los funcionarios aprehensores no portaban orden de detención escrita, solo iban con una orden verbal, de la cual tampoco se dejó constancia posteriormente, ni se justificó ante el juez de la causa Rol 27.788.

Que, la víctima sufrió apremios físicos por parte de sus captores, tanto así, que en base a los informes periciales reseñados previamente del Servicio Médico Legal de fojas 1033, 1056 y 1519, se concluye que don Gumercindo Álvarez, durante su cautiverio, sufrió fracturas costales previo o al momento de su muerte, pues las secuelas físicas advertidas en los restos óseos de la víctima son "perimortem". Esto se condice con las lesiones en el cuerpo vistas por sus hijos, especialmente las referidas por don Gumercindo Álvarez Segovia, por doña Nally y por doña Mercedes Álvarez Segovia. Y con los testimonios de Carlos Peña Brunes, Manuel Cangana Araya, Bladimir Semeria Solar y Eduardo Cuevas Cuevas, quienes se refirieron a sus propias vivencias padecidas en esa misma época, donde explican cuál era el modus operandi y tipos de apremios que aplicaban los efectivos del SICAR a los detenidos. Al respecto, vale tener presente los testimonios de Juan René Ramírez Ruz y del acusado Juan León Hernández, ambos efectivos SICAR para la época de los hechos, quienes declararon que escuchaban gritos durante los interrogatorios a los detenidos, incluso León presume que eran gritos por



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

estar siendo golpeados y que es posible que la víctima de autos haya sido golpeada también.

**VIGÉSIMO:** Que, en base a las conclusiones de los motivos precedentes, se tienen por acreditados los hechos establecidos en la acusación fiscal de fojas 2039 y siguientes, a saber: a) Que la víctima Gumerindo del Carmen Álvarez Segovia fue detenido por efectivos del Servicio de Inteligencia de Carabineros de Chile (SICAR) -entre ellos Juan León Hernández, como se dirá más adelante- quienes no portaban orden alguna que los facultara para tal efecto, en su domicilio, la tarde del día 29 de agosto de 1974; b) Que la víctima es trasladada al Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta, lugar donde se encontraban las dependencias de dicho Servicio de Inteligencia, a cargo del Capitán de Carabineros Eduardo Aguilar Valdés; y c) Que, estando privado de libertad, sin derecho, fue torturado por personal del SICAR, provocándole la muerte el 2 de septiembre de 1974.

#### **CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS:**

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, los hechos descritos en los motivos precedentes son constitutivos del delito de secuestro calificado, en grado de consumado, previsto en el artículo 141 inciso 3° del Código Penal, puesto que de la detención y encierro de la víctima Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, la cual fue practicada por funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros de Antofagasta, resultó grave daño en la persona o intereses de la víctima, culminando con su muerte producto de los apremios físicos y psicológicos recibidos.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, de este modo, dichas conductas, cometidas por agentes del Estado, afectaron uno de los bienes jurídicos más relevantes, consagrado como derecho humano fundamental en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, la libertad en su aspecto material, es decir, el derecho a decidir sin interferencias coactivas de terceros su ubicación espacial, deteniéndolo y encerrándolo en un recinto fuertemente custodiado por personal armado del que estuvo impedido de salir.

Es más, a consecuencia de la pérdida de libertad de la víctima se produjo el debilitamiento de sus defensas



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

privadas, situación aprovechada por los agentes para causarle apremios físicos que lo llevaron a la muerte, circunstancia que, por cierto, satisface una de las hipótesis de cualificación del delito de secuestro, puntualmente aquella tipificada en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, vale decir, que a consecuencia del encierro o detención haya resultado un daño grave en la persona del encerrado o detenido.

En consecuencia, se ha demostrado en este proceso que concurren los requisitos establecidos en el artículo 141 inciso final del Código Penal, constituyendo los hechos establecidos en este proceso el delito de secuestro calificado de don Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, acaecido en la ciudad de Antofagasta entre el 29 de agosto y 2 de septiembre de 1974, culminando con su muerte en la tarde de este último día, en dependencias del Servicio de Inteligencia de Carabineros al interior del Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, sin perjuicio que aún no se ha abordado las fundamentaciones para determinar los participantes en el hecho que se ha dado por acreditado, es evidente que en él actuaron funcionarios públicos, de este modo, el principio de objetividad indica que se debe razonar sobre la procedencia de la figura penal prevista en el artículo 148 del Código punitivo, en la eventualidad que pudiere ser favorecido los acusados con esta calificación jurídica.

Que, para estar ante este tipo penal deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que se detenga en razón de la persecución de un delito; b) Que se deje alguna constancia de la detención; c) Que se ponga al detenido a disposición de los tribunales de justicia.

Respecto de la primera exigencia, cabe señalar que a fojas 14 de la causa a la vista Rol N°27.788, se informó por el SICAR que la víctima había sido detenida debido a que en infringía la Ley N° 12.927, Título III, artículo 6° letra b) de Seguridad del Estado, por insultar y hablar contra el Gobierno de turno. Sin embargo, refieren que tal delito estaba siendo cometido "al momento de su detención", lo cual no es verídico, pues, como quedó establecido previamente, según el testigo que depuso en la causa Rol N°27.788, esos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBR SX

insultos habrían sido proferidos en el lugar de trabajo de la víctima y no en su domicilio (lo que también se indicó en la declaración que habría sido efectuada por el mismo afectado quien, según el documento agregado al parte policial que dio cuenta de la muerte de don Gumerindo Álvarez éste habría confesado: "en la sección maestranza de la Empresa Minera de Mantos Blancos donde me desempeñé como maestro soldador. Que entre el día martes o miércoles de la semana comprendida entre el 19 al 25 de Agosto pasado, y mientras me encontraba en el turno de 08,00 a 16,00 horas, trabajando en la sección antes indicada, proferí a viva voz palabras soeces en contra de la Junta Militar de Gobierno". Por tanto no se cumple la primera exigencia, ya que no se había cometido ningún delito, ni siquiera en situación de flagrancia. En cuanto al segundo requisito, quedó claramente establecido de los motivos precedentes, que al momento de la detención, los aprehensores no portaban ninguna orden escrita que los facultara para actuar, solo habrían ido con órdenes verbales, de las cuales no se dejó constancia posteriormente. Solo consta en la referida causa a la vista el Parte denuncia N°27 a fojas 3, donde el SICAR meramente informa el suicidio de la víctima y dan algunas luces de los motivos de su detención, pero nada relacionado con la orden de detención misma. Y en cuanto al tercer requisito, está ampliamente comprobado que la víctima no fue puesta a disposición de tribunal alguno, pues se mantuvo detenida en poder del SICAR hasta el momento de su muerte, sin que haya existido explicación alguna porqué la declaración no se le tomó el mismo día de la detención o a lo más al día siguiente, sobre todo porque no existió antecedente alguno respecto de otras indagaciones que se hubieren realizado durante el periodo de la detención que hicieren necesario postergar el encierro al que fue sometida la víctima.

De esta manera, no concurren los requisitos previstos en el artículo 148 del Código Penal para sancionar la conducta investigada por esa figura penal, por lo que este sentenciador proseguirá con la calificación jurídica de los hechos efectuada en la acusación fiscal de autos, en la figura de secuestro calificado, lo que se sustenta con el grave daño que le siguió a la víctima Gumerindo Álvarez (torturas y muerte).



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



## **RESPECTO DE LAS ACUSACIONES PARTICULARES:**

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, don Álvaro Aburto Guerrero, y la abogada de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), doña Adriana Rojas Pérez, formularon además acusaciones particulares por el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 292 del Código Penal, que este tribunal desestimaré porque de los fundamentos de esa petición se desprende que el Servicio de Inteligencia de Carabineros de Antofagasta, era un departamento o apéndice de la Prefectura de Carabineros, como ocurría en cada una de las Prefecturas del país, y la circunstancia que ese organismo se dedicara a la persecución de los opositores al régimen de facto, no significa que actuara con autonomía respecto de las autoridades de la Prefectura. Como se verá más adelante, la razia en contra de los opositores o adherentes al gobierno constitucional depuesto, fue una acción programada y ejecutada siguiendo las instrucciones de las más altas autoridades que regían en el país con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, de allí se desprende que no es una agrupación formada exclusivamente para eso en la ciudad de Antofagasta y dicha Prefectura, se enmarca en una situación universal implantada en todo el país, para lo cual se utilizó ese Servicio de Inteligencia que ya existía previamente como comisiones civiles para otros fines en algunas Comisaría de la ciudad, de tal suerte que para calificar esa conducta como asociación ilícita, deberíamos concluir que Carabineros de Chile incurrió en ese delito. Por otra parte, en las acusaciones particulares en estudio no se describen hechos precisos que pudieren calificarse como constitutivos de la antedicha figura penal, y la descrita en el auto acusatorio de oficio no cubre los tópicos que exige el artículo 292 del Código Penal, de tal manera que, de pronunciarse en favor de lo pedido por los querellantes, podría hacer incurrir al tribunal en ultra petita.

## **DELITO DE LESA HUMANIDAD:**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, respecto del secuestro calificado, además, debe considerarse que de los antecedentes allegados al proceso fluyen algunos elementos para determinar cuáles fueron las verdaderas razones para detener a Gumerindo Álvarez Pizarro por los funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros, y si bien se le trató de vincular a una infracción legal relacionada con Ley de Seguridad Interior del Estado, lo cierto es que queda claro que fueron razones de persecución política las que motivaron a los hechores a detener a la víctima, lo cual constituye delito de lesa humanidad, como se dirá a continuación.

El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fojas 102, refiere que "El 2 de septiembre de 1974 falleció Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, obrero de Mantos Blancos y militante del PS. El 29 de agosto había sido allanada en Antofagasta su casa por civiles que se identificaron como miembros de la FACH, los que se llevaron detenida a la víctima. Cuatro días después fueron carabineros a su casa y les informaron a sus familiares que Gumerindo Álvarez se encontraba hospitalizado y en estado grave. En la posta les contaron que la noche anterior había llegado ya muerto en un furgón de Carabineros. Estaba muy golpeado, no tenía las uñas de las manos ni las de los pies, tenía una marca en el cuello como dejada por un alambre fino. Las huellas que registraba el cuerpo permiten a la Comisión llegar a la convicción de que Gumerindo Álvarez falleció producto de las torturas recibidas por parte de agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos". Según ya se dejó establecido, el secuestro y muerte de la víctima correspondió a acciones carentes de toda justificación, de responsabilidad de agentes del Estado, en violación de los derechos humanos más fundamentales, sin que se haya demostrado siquiera la veracidad de las exclamaciones que se le atribuyó. Es más, la persecución sufrida por la víctima se da en un contexto de ubicación por parte de las fuerzas de orden y seguridad de Antofagasta, de todas aquellas personas militantes o simpatizantes de izquierda de la zona, contrarios al régimen militar. Si atendemos a lo resuelto por la Excmá. Corte Suprema en la causa Rol N° N° 78.951-2016, en sentencia de 25 de mayo de 2017, en que manifestó: "CUARTO: Que, sin embargo, como reiteradamente ha señalado esta Corte



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

y recoge acertadamente el recurso, se denominan crímenes de lesa humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente. En definitiva, constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes." Y más adelante el mismo fallo señala: "SEXTO: Que con ocasión del estudio del elemento de contexto del crimen de lesa humanidad, contenido en el preámbulo del artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la doctrina más autorizada ha señalado que dicho precepto convierte en crimen de lesa humanidad los actos individuales enumerados en dicha disposición, en tanto cumplan con el test sistemático general. Esta prueba se propone para garantizar que los actos individuales, aislados o aleatorios, no lleguen a constituir un crimen de lesa humanidad. Mientras que el término "generalizado" implica un sentido más bien cuantitativo: que un acto se llevará a cabo a gran escala, involucrando a un gran número de víctimas, la expresión "sistemático" tiene un significado más bien cualitativo que requiere que el acto se lleve a cabo como resultado de una planificación metódica. Sin perjuicio que la jurisprudencia siempre ha optado por una lectura disyuntiva o alternativa de estos elementos, se ha destacado que lo más importante ya no es el significado aislado que aporta cada uno de estos elementos expresados de modo alternativo, sino el que adquieren al interconectarse, en la medida en que la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

"comisión múltiple" debe basarse en una "política" de actuación, sólo su existencia convierte múltiples actos en crimen de lesa humanidad. Este elemento -de la política- deja claro que es necesario algún tipo de vínculo con un Estado o un poder de facto y, por lo tanto, la organización y planificación por medio de una política, para categorizar de otro modo los delitos comunes como crimen de lesa humanidad (Ambos, Kai. "Crímenes de Lesa Humanidad y la Corte Penal Internacional"); SÉPTIMO: Que en ese orden de ideas, cabe reiterar que el recurrente arguye que respecto de las hipótesis que prevén los crímenes contra la humanidad, a saber, el "ataque generalizado" y el "ataque sistemático" contra la población civil, en el caso de estos antecedentes nos encontramos frente a un ataque indiscriminado, que no exige que la víctima haya tenido una militancia política u opción política definida, o que el delito se haya cometido a causa de tal militancia u opción política de la víctima, lo cual supone que la propuesta de nulidad deriva de la consideración que el régimen imperante a la época de la muerte del ofendido, correspondió con una política estatal de control que autorizó a los agentes del Estado para detener, afectar la integridad e incluso privar de la vida a los ciudadanos. Por otro lado, consta de autos que con ocasión de estos hechos se instruyó un proceso militar por el 2do. Juzgado Militar de Santiago, Rol N°875-77, en que los agentes estatales no fueron considerados responsables de delito alguno, ya que fueron absueltos con fecha 10 de diciembre de 1980, lo cual pone de manifiesto que su actuar al menos contó con el beneplácito o tolerancia de los responsables de diseñar e implementar esta política estatal de control del orden público". El fallo de la Excmá. Corte que se ha venido analizando, continuó razonando explicando que: "OCTAVO: Que en este contexto, los hechos que causaron la muerte de González Cerda a causa de las maniobras dolosas desplegadas por los funcionarios estatales pueden constituir un delito de lesa humanidad, pues es incuestionable, no sólo en atención a los hechos del proceso sino, además, por lo que ha sido demostrado por diferentes informes, que en la época se implementó una política estatal que consultaba la represión de posiciones ideológicas contrarias al régimen, pretendiéndose la seguridad interna al margen de toda



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

consideración por la persona humana a través de maniobras de amedrentamiento a los civiles y, sobretudo, la garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, entre otras actuaciones, lo que ha sido recogido en autos al encontrarse González Cerda en la nómina de víctimas de violación de sus derechos humanos por agentes del Estado que hicieron uso irracional de la fuerza, conforme lo concluido por el Consejo Superior de la Comisión Rettig, según aparece del Informe que ésta evacuara sobre calificación de víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, lo que habilitó a la señora Fiscal Judicial para formular el requerimiento respectivo y solicitar la instrucción del sumario correspondiente". En la sentencia de reemplazo dictada al acoger el recurso de casación en el fondo la Corte dictaminó: "Que los hechos indagados se han producido en virtud de una política estatal de represión y control ejecutada al margen de toda consideración por la persona humana, amedrentando a la población y otorgando una garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, de manera que ellos no pueden ser calificados en modo alguno como un comportamiento negligente y menos de carácter común".

#### **EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN:**

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, la acusación fiscal se dirigió en contra de Eduardo Julio Aguilar Valdés, Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández, por secuestro calificado.

Habrá que considerar que Eduardo Julio Aguilar Valdés falleció con posterioridad a la acusación, por lo que se dictó el correspondiente sobreseimiento parcial y definitivo a su respecto a fojas 2494.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que en lo tocante a la participación atribuida a **Ricardo Lillo Morandé**, este declaró a fojas 413, 934, 1603 y 2563, señalando, en síntesis, que al final del primer semestre de 1974, fue ascendido a Capitán y destinado en septiembre del mismo año como Ayudante del Intendente de Antofagasta, General Karol Urzúa Ibáñez, función que cumplió durante un año. Aseveró que en Antofagasta no había Servicio



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

de Inteligencia de Carabineros, a lo más había una Comisión Civil de la Tercera Comisaría y cumplían funciones operativas policiales. Niega haber pertenecido a grupos de Inteligencia o Comisión Civil y su pertenencia al SICAR que le hacen otros declarantes. Explicó que esporádicamente le tocó ir al Grupo de Instrucción de Carabineros, ya que debía realizar funciones de toque de queda. Señaló que no había médicos en el Grupo de Instrucción, tampoco paramédicos, quienes estaban en la base de la Prefectura. Indica que debe haber ido al Grupo de Instrucción una o dos veces al mes y que no conoció al doctor Drago Zlatar. Explica que el cabo Ovando generalmente realizaba funciones con él, dependía directamente de él por ser de la dotación de la unidad de radio patrullas. Refiere que el SICAR tenía agrupaciones, desconoce si una de estas agrupaciones funcionó en el Grupo de Instrucción de Carabineros, porque nunca participó en reuniones en esa unidad. Afirma que en el período que ocurrieron los hechos, estaba prácticamente desvinculado de las investigaciones, pues estaba realizando una inducción de preparación por parte del Capitán Medina Galaz para tomar su cargo en octubre de 1974 en la Intendencia. Tiene entendido que los detenidos no ingresaban a los calabozos sino a un patio que había en ese recinto, y que el SICAR no tuvo dependencias físicas sino que realizaban acciones determinadas. Tenía su oficina en la base de la Prefectura, si era necesario iban a los patios de la Prefectura para transmitir la información para llevar a cabo una operación. Figura en su Hoja de Vida y Calificaciones como SICAR pero afirma que nunca participó en actividades de inteligencia. Precisa que trabajó junto a Ovando hasta el 20 o 25 de agosto de 1974. No sabe si Ovando participó esporádicamente en el Grupo de Instrucción. Señala que Orlando del Río era el segundo a cargo, no él. Refiere que a fines de agosto de 1974 comenzó a avocarse a lo que sería posteriormente su trabajo en la Intendencia, y que en junio de 1974 sí se encontraba realizando funciones en el SICAR y como Jefe de la sección de radio patrullas y de tránsito. Indica que le rendía cuenta al Capitán Aguilar, quien era el Jefe del SICAR. Presume que Aguilar podría haber dispuesto que Ovando efectuara detenciones sin su conocimiento. Aclara que ingresando al SICAR, Ovando dejaba de depender de él. Explica que si Aguilar Valdés no se encontraba, quien lo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

subrogaba era Orlando Del Río y si este no estaba, y era una función para desarrollar en la base, la asumía él, pero si era una función para el Grupo de Instrucción, quedaba a cargo de los suboficiales.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que, Ricardo Lillo Morandé, quien a la época de los hechos tenía el grado de Teniente, siempre negó haber pertenecido al SICAR y sólo una vez que se le exhibió su hoja de vida, que rola a fojas 907, donde consta expresamente que se dejó constancia que pasó a formar parte de ese servicio desde el 15 de octubre de 1973, admitió que sí se desempeñó en ese organismo. Al efecto, a fojas 1605 señaló que para junio de 1974 se encontraba realizando funciones en el SICAR y como Jefe de la sección de radio patrullas y de tránsito. También indicó que en el equipo trabajaba con el Cabo Ovando, pero solo hasta el 20 o 25 de agosto de 1974, ya que desde esa fecha comenzó a avocarse para la labor que desempeñaría en la Intendencia a futuro, además señaló que personalmente le daba cuentas al capitán Aguilar Valdés. Sin embargo, los datos aportados por el acusado no son ciertos, ya que según su Hoja de Vida, el 20 de octubre de 1974 pasó a prestar servicios como Ayudante de la Intendencia, fecha en que también fue ascendido a Capitán. Además, no consta en su Hoja el cese de sus funciones en el SICAR. En lo que concierne a esta investigación, la vinculación que hace de sí mismo con el cabo Héctor Ovando, es relevante desde que este sujeto (ya fallecido) fue uno de los funcionarios aprehensores de Gumeriendo Álvarez Pizarro, y según palabras del otro acusado, Juan Arturo León Hernández, fue el encargado de llevar a efecto la diligencia, quien recibió la orden directamente de Aguilar y Lillo (Villanueva Zeballos también declaró que las órdenes emanaban de Aguilar y Lillo, pues ellos mandaban). Además, el acusado León expresamente lo sitúa en las dependencias del Grupo de Instrucción el día de la detención de Gumeriendo, y por su parte, el testigo Juan Ramírez Ruz hace lo propio situándolo en ese recinto durante el día de la muerte de la víctima. Además, este testigo explicó que en los interrogatorios de los detenidos, de los cuales escuchaba gritos, participaba un Teniente, y a la fecha de los hechos, Ricardo Lillo era el Teniente que secundaba en el cargo a Aguilar Valdés, y según sus palabras, el más antiguo después del Capitán Aguilar. Jaime Rodríguez



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Quiroga declaró algo similar, que cuando llevaban un detenido, lo esperaba el grupo interrogador, compuesto por los oficiales y sargentos más antiguos. Que además, diversos declarantes afirman que Lillo era uno de los que estaba a cargo, y el siguiente al mando después de Aguilar (además de León, Ramírez y Rodríguez, así lo declaran José Villanueva Zeballos, José Jiménez Hernández y Jorge Labrín González). Incluso, Villanueva y Ramírez aseguran que Ovando era el brazo derecho de Lillo, su cabo de confianza, que se involucraba en los pormenores de todos los procedimientos, lo que da más realce a la presunción de que Lillo, ya sea por sí solo o junto a Aguilar, ordenó la detención de Gumerindo Álvarez y participó en sus interrogatorios y, por consiguiente, en sus torturas. Y a mayor abundamiento, el Parte N°27 de fojas 3 de causa a la vista Rol N° 27.788, señala que la víctima sería trasladada a la Cárcel Presidio de Antofagasta en uno de los vehículos del **Servicio Radiopatrullas**, y según las propias palabras de Lillo, él era el Jefe de este Servicio y en sus declaraciones no negó rotundamente este punto.

Este acusado, en una conducta esperada para quien está siendo sindicado de un delito tan grave, trató de tender mantos de dudas, además de su presunta falta de conocimiento de la denominación del organismo al cual pertenecía, el SICAR, las labores que ejecutaba en él, etcétera. También señaló que él no era el primer subrogante de Aguilar Valdés, sino que Orlando del Río, y en caso que este último no estuviera, asumía él. Pero según consta en la hoja de vida de Orlando del Río, éste se encontraba prestando servicios en la Intendencia de la Provincia desde el 26 de mayo de 1974. **Eduardo Julio Aguilar Valdés (fallecido después de la acusación y sobreseída parcial y definitivamente la causa a su respecto)**, declaró a fojas 519, 532, 859, 938, 1442, 1791 y en careos de fojas 860, 861, 862, 863, 939 y 940, señalando que en el SICAR estaba también el Teniente Lillo. Indica que a contar del 16 de agosto de 1974, gozó de su feriado legal por 20 días, lo cual hizo efectivo, coincidiendo con la preparación de su examen de promoción al grado de Mayor. Refiere que cuando perteneció al SICAR, su misión era trabajar con un grupo de civil en el Grupo de Instrucción, y que las órdenes eran verbales. No hubo desdoblamiento entre



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



la jefatura del Grupo de Instrucción y del SICAR. Se usaron bodegas del Grupo de Instrucción como calabozos porque así lo dispuso la Intendencia, como un lugar de detención por el toque de queda. Señala que trabajó con Ovando en el SICAR, al igual que Lillo y Orlando Del Río. Además, en la Hoja de Vida de Aguilar Valdés consta que hizo efectivo su feriado por 20 días a contar del 16 de agosto de 1974 (lo que no obsta a que este igualmente pudiera estar presente en el Grupo de Instrucción para la época de los hechos, tal como señala León y Juan Ramírez Ruz que lo vieron). Sin embargo, formalmente, en dicho período de 20 días, mandaba el jefe subrogante, que en vista de los dichos hechos valer previamente, y de los propios dichos de Lillo que confirma ser el subrogante cuando Orlando del Río no se encontraba (lo cual ya quedó despejado al encontrarse este en la Intendencia), se tiene por acreditado que este acusado sí se encontraba presente durante el secuestro de Gumerindo Álvarez y fue uno de los que ordenó su detención.

Que, de esta manera, y por las razones expuestas precedentemente, ha quedado demostrado fehacientemente que este acusado participó activamente en los hechos investigados, que la imputación directa de su actuación en los hechos que se desarrollaron en torno al secuestro de la víctima, formuladas por otro copartícipe que estuvo confeso de su propia actividad delictual en el hecho punible (León Hernández) y por el testigo Ramírez Ruz, además de su pertenencia al Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), organismo al cual también pertenecían Aguilar Valdés y León Hernández, resulta suficiente demostración de su autoría en el secuestro calificado de la víctima Álvarez Pizarro, por lo que se dictará sentencia condenatoria en su contra.

**VIGÉSIMO NOVENO:** Que en lo tocante a la participación atribuida a **Juan Arturo León Hernández**, cabe consignar que éste declaró a fojas 290, 294, 850, 1150, 1284, 1660, 1697, 2372 y a fojas 19 vuelta de la causa Rol N°27.788 del Segundo Juzgado del Crimen de Antofagasta, tenida a la vista a fojas 794, señalando que a mediados del año 1974 fue destinado para trabajar en el Servicio de Inteligencia de Carabineros de Antofagasta. Que entre sus compañeros recuerda a Héctor



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Ovando, Hugo Hermosilla Parodi, y otros. Indicó que la función principal era netamente asuntos internos, investigaciones de personal en servicio activo y de postulantes de la institución. Contaban con un vehículo proporcionado por la Prefectura, se trataba de una camioneta vieja, de la cual no recuerda marca y la tenían para realizar las compras y era facilitada para el cumplimiento de su función. Afirmó que nunca vio personas detenidas en dependencias del SICAR, que nunca trabajó con Hermosilla ni Ovando y no recuerda la muerte de Gumerindo Álvarez. Negó como suya la declaración y firma de fojas 19 vuelta de la referida causa a la vista Rol N° 27.778, así como también toda participación en la detención de Gumerindo Álvarez. A fojas 1150, ofreció nueva declaración, donde agrega que cuando llegó al Servicio, el SICAR funcionaba en las dependencias del Grupo de Instrucción y aun cuando el lugar que estaba destinado a dicho servicio era unas oficinas ubicadas a un costado de la Iglesia la Providencia, no era posible instalarse por cuanto aún no estaba en condiciones. Recuerda a Orlando del Río Contreras, uno de apellido Lillo, mientras que el jefe del Servicio era el Capitán Eduardo Aguilar Valdés, quien dejó el SICAR a fines de 1974. Relató que en ese mismo año, en el SICAR se recibió una orden desde la Intendencia que se detuviera a una persona, orden recibida por Ovando. Que junto a Ovando y Hermosilla, detuvieron al sujeto en lugar cercano, el cual fue llevado al Grupo de Instrucción y entregado al cabo Osvaldo Canto Aguayo para que se le tomara una declaración. Indicó que Ovando fue a la oficina a dar cuenta del cumplimiento de la detención de esa persona, y que a los días siguientes de dicha detención, tomó conocimiento que lo encontraron muerto en uno de los calabozos del SICAR que había en el Grupo de Instrucción. Rectificó su declaración de fojas 850 y aclara que una firma de fojas 19 vuelta y una de fojas 10 vuelta, de la antedicha causa Rol N° 27.778, son de su puño y letra. Añadió que al SICAR llegaba personal del Ejército, Fuerza Aérea, quienes se reunían con los Jefes en reuniones, cree que eran del grupo de inteligencia de esas entidades. En cuanto a la línea de mando del SICAR, manifiesta que durante todo el tiempo que el servicio funcionó en el Grupo de Instrucción, el mando estaba a cargo del Capitán Eduardo Aguilar Valdés, le seguía en el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

orden el Teniente Ricardo Lillo Morandé, después venían los suboficiales, primero Ismael Rivero Cuello, Héctor Enrique Ovando, Luis Núñez Jara, José Villanueva Zeballos, José Soto Ampuero, Enrique Contreras Henríquez, Hugo Hermosilla Parodi, Osvaldo Canto Aguayo, este era el escribiente en las declaraciones, y Juan Ramírez Ruz. Aclaró que más de algún detenido pudo estar más de uno o dos días en el Grupo de Instrucción, hasta que los oficiales a cargo disponían qué se hacía con él. Hace presente que el día que entregaron al detenido en el recinto de guardia, le notificaron que se iba de servicio a Ollagüe, en compañía del Cabo 1° José Villanueva Zeballos. Manifestó que Ovando fue a dar cuenta de la detención a la oficina del jefe Aguilar y que en el pasillo vio al Teniente Lillo, quien andaba con un civil. A fojas 1697, precisa que él no efectuó la detención de la víctima, sino simplemente su traslado. Que en esa oportunidad él se encontraba en el Grupo de Instrucción y Ovando le ordenó que lo acompañara a un procedimiento, sin saber dónde era. En el trayecto manifestó que era a la Intendencia, que había una orden de dicha institución de llevar a una persona para que le tomaran declaración. Le parece que la orden provenía del Coronel Ortiz y el Comandante Salazar Lantery, según le comentó Ovando, (sin embargo Salazar Lantery declaró a fojas 317 y 541, sin recordar nada de los hechos de autos). Manifestó que dos personas le entregaron al detenido. Afirmó que la orden directa la dieron Aguilar con Lillo a Ovando, que Aguilar estaba ese día. Señaló que cuando llegó fue y firmó un parte sin nombre, lo cual fue el 30 o 31 de agosto de ese año. Recuerda que la razón por la que había que ir a buscar a esta persona a la Intendencia, se debía a una situación ocurrida en una minera. Refirió que los funcionarios que realizaban las interrogaciones eran el escribiente Canto, el Teniente Lillo, el jefe Aguilar Valdés. Cree que en el momento en que Aguilar es trasladado a jefe de Grupo trasladan a Lillo a la Intendencia. Agrega que los interrogatorios se efectuaban en una sala de clase que estaba habilitada con máquina de escribir y una silla de madera. Escuchó gritos de personas mientras eran interrogadas, sonaban como gritos de personas que eran golpeadas. Manifiesta como posible que la víctima haya sido golpeada durante su interrogatorio.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

**TRIGÉSIMO:** Que, Juan Arturo León Hernández, quien a la época de los hechos tenía el grado de Cabo 1º, según su Hoja de Vida agregada a fojas 956, confesó haber integrado el Servicio de Inteligencia de Carabineros de Antofagasta, sin embargo, este acusado negó en un principio su participación en los hechos de la causa, refiriendo desconocer a la víctima y que incluso no vio detenidos en dependencias del Grupo de Instrucción de dicha ciudad. Tan firme fue su negativa en su versión inicial, que al momento de exhibírsele las firmas a su nombre del expediente a la vista Rol N°27.788, afirmó que estas no eran de su puño y letra, situación que después rectificó en declaración posterior, ofrecida por el propio acusado cuando se le incoó un auto de procesamiento en su contra, aclarando que dos sí eran firmas suyas y confesando su participación en los hechos de autos, aunque permeándola, pues se limitó a decir que colaboró en el traslado de la víctima, mas no en la detención. Al haber reconocido la titularidad de las firmas que antes había cuestionado relativizó el valor probatorio de la pericia documentales de fojas 886, 917 y 960 que había concluido como falsas las firmas estampadas a nombre de este acusado a fojas 10 vuelta y 19 vta. de la citada causa a la vista, porque doña Sandra Córdova Delgado, declaró a fojas 2566 y explicó que cuando ve una firma que no tiene nada que ver en el diseño, es distinta a la que la persona habitualmente realiza, no se corresponden, porque son distintas, señala que es falsa, porque no está la que debería ser. Sin embargo, aclara, eso no significa que la persona no la hizo, porque uno puede deformar su firma o puede inventar una y colocar cualquier garabato ahí como para después decir "yo no la hice", concluyendo que la firma dubitada era falsa en relación al material de comparación.

Por otro lado, este acusado en sus últimas declaraciones relata que concurrió con Ovando a la Intendencia a buscar al detenido, para posteriormente trasladarlo al Grupo de Instrucción, siendo entregado en la guardia. Sin embargo, no hay otros antecedentes en autos que avalen esos dichos. Al contrario, Jaime Dagoberto Rodríguez Quiroga testificó que trasladaban a los detenidos desde su domicilio al Grupo de Instrucción. Y en base a los antecedentes que obran en la causa Rol N°27.788 a la vista a fojas 794, ya sea declaración



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

de Héctor Enrique Ovando, Hugo Hermosilla Parodi, el Parte N°27 de fojas 3, el Oficio N°250 de fojas 14, la propia declaración del acusado León, sitúan la detención "frente" al domicilio de la víctima, no en la Intendencia. Y de ser ciertas las palabras de León, entonces una vez más el SICAR, al informar los pormenores de la detención de Gumerindo, desaprovechó la oportunidad de mitigar su responsabilidad, pues no dieron cuenta de dicha situación al Juzgado del Crimen, algo que pudo tener asidero al comienzo cuando la mujer e hijos de la víctima refirieron que la detención la habrían efectuado personal de la FACH, sin embargo, uno de los hijos del afectado señaló que su madre cuando andaba buscando a su padre, divisó en el Grupo de Instrucción de Carabineros la camioneta en que fueron a detener a su marido, de lo que se colige que fueron los miembros del SICAR los que concurrieron al domicilio de don Gumerindo Álvarez a detenerlo, entre los que se encontraba este acusado. Por tanto, no resulta creíble la nueva versión aportada por el acusado León sobre el lugar de detención. Además, él limita su responsabilidad al simple traslado del detenido, cosa que en nada desvirtúa su autoría conforme al artículo 15 N°1 del Código Penal en el secuestro calificado imputado en su contra.

También, a fojas 2376 este acusado trata de desviar su responsabilidad señalando que el Cabo Primero Canto Aguayo lo llamó, le ordenó ir al Juzgado y lo obligó a ratificar un parte que había mandado el SICAR, parte que jamás vio. Que en atención a la presión psicológica y circunstancias del momento, al estar en Dictadura debía cumplir la orden, la cual provenía de Aguilar Valdés y Lillo Morandé, según le informó el escribiente Canto Aguayo. Sin embargo, en su declaración de fojas 19 vta., de la causa Rol 27.788, consta que no ratificó ningún parte y además la diligencia fue decretada a fojas 3 vta., por el juez Juan Enrique Sinn Bruno, por lo que era una citación judicial, no una orden de Carabineros.

Además, demuestra ser persistente en su intento por abstraerse de la situación, ya que también manifestó que una vez entregada la víctima en la guardia del Grupo de Instrucción, lo destinaron inmediatamente en comisión de servicios junto a Villanueva Zeballos, a la localidad de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Ollagüe. Al respecto, el acusado refirió que estas comisiones duraban dos días aproximadamente, lo que es corroborado por Villanueva, quien señaló ir en comisión de servicios a Ollagüe con León Hernández, y que cuando él iba para allá, se iba en la mañana como a las 6:45 horas y volvía como 2 o 3 días después. Sin embargo, con un somero conteo de días desde efectuada la detención, León Hernández ya debiera haber estado de regreso en Antofagasta para el 2 de septiembre de 1974, por lo que se cae su afirmación de fojas 1699 en que ese día no se encontraba por estar en comisión. Además, contradice sus propios dichos de fojas 19 vta., de la causa Rol 27.788, donde señala que de la muerte de Gumerindo se enteró en la tarde de ese día, ya que se encontraba de servicio en la ciudad. ¿No le habría sido más conveniente decir en ese momento que estaba en Ollagüe?. Además, a fojas 1697 precisa que llegó de Ollagüe el 30 o 31 de agosto de 1974, afirmación que se condice más con la dinámica de los hechos comprobados.

Todas estas contradicciones restan credibilidad a los dichos del acusado, y en cambio cobra fuerza el testimonio de Juan Ramírez Ruz, quien vio a León en el Grupo de Instrucción el día de la muerte de Gumerindo Álvarez. Esto, sumado a la propia confesión del acusado de haber sido uno de los partícipes en la detención de la víctima, da por comprobada su participación en los hechos.

Habiéndose acreditado la participación de este acusado como autor inmediato y directo del secuestro calificado de don Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, se dictará sentencia condenatoria en su contra.

#### **CONTESTACIÓN DE LAS ACUSACIONES:**

**TRIGÉSIMO PRIMERO:** Que respecto de la contestación de la acusación que formuló el apoderado del acusado Ricardo Lillo Morandé, que acusa vaguedad en la descripción de los hechos y la falta de participación de su defendido en los hechos, este sentenciador se remitirá a las fundamentaciones ut supra respecto del establecimiento del hecho punible y su participación. Y en cuanto contestó las acusaciones particulares, habrá que estarse a lo que respecto a esos delitos se indicó en este fallo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

**TRIGÉSIMO SEGUNDO:** Que la misma suerte correrá la contestación de la acusación que en representación del acusado Juan Arturo León Hernández efectuó el abogado don Mauricio Alex Suazo Araya a fojas 2223, porque al contrario de lo que invoca el defensor, a Juan León no se le podía exigir realizar una conducta que implicaba la comisión de un delito, él, como el otro acusado por este delito estaban conscientes de que no existía una orden de algún tribunal o fiscalía que dispusiera la detención de la víctima y tampoco se preocuparon de ponerlo a disposición de algún juzgado sino de quienes lo torturaron hasta provocarle la muerte; su formación policial y su experiencia debía indicarle que no podía detener sin una orden formal previa.

Que la alegación que hace su defensor sobre la falsedad de las firmas consignadas en la causa Rol N°27.788, no tiene asidero en las pruebas rendidas en la causa, toda vez que la conclusión de la perito caligráfica no fue concluyente y se basó en lo que ella estimó como indubitado, pero además de las declaraciones prestadas por su defendido ante un tribunal ordinario, que es de suponer que debió cerciorarse que la persona que estaba declarando ante él era realmente quien decía ser, otros funcionarios del SICAR lo mencionaron como integrante de la patrulla que detuvo a la víctima, lo que asimismo, informó el SICAR a fojas 14 de los autos antes citados; y por último, el propio León Hernández reconoció que esas eran sus firmas. Por otra parte, pretender desacreditar las firmas estampadas con las siglas del SICAR por el solo hecho de no dar cuenta el nombre de quien las realizó, ello no significa que esos documentos no existieran, lo que sucedía era que el actuar de estos organismos perseguían obtener confidencialidad y por qué no decirlo, también la impunidad en su actuar, pero no ello no puede significar que se haya inventado que este acusado participó en la detención de la víctima, porque así lo manifestaron Hugo Hermosilla Parodi y Héctor Enrique Ovando a fojas 18 y 18 vuelta, y al respecto no hay ningún antecedente que se quisiera perjudicarlo al designarlo como integrante de esa patrulla.

Que, respecto del error de prohibición, se basa principalmente en que debió cumplir una orden de sus superiores que se desempeñaban como jefes del Servicio de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Inteligencia de Carabineros de Antofagasta, quienes a su vez habrían recibido la orden desde la Intendencia. En relación a la mentada orden, no obstante que en el parte policial de fojas 3 se pretendió dar un viso de legalidad al procedimiento mencionando un oficio cuya copia tampoco se acompañó, donde se habría solicitado una prolongación de la detención, lo cierto es que ninguno de los aprehensores al declarar a fojas 18, 18 vuelta y 19 vuelta, mencionaron haber actuado en cumplimiento de una orden, en efecto Ovando señaló que lo detuvieron por "haberse tenido conocimiento que éste había injuriado a la Honorable Junta Militar de Gobierno de Chile, en el Mineral de Mantos Blancos, Sección Maestranza" y el mismo acusado León Hernández señaló que la detención se produjo: "en atención a que había estado injuriando a la Honorable Junta de Gobierno, en el Mineral de Mantos Blancos en donde trabajaba y ante mucho de los trabajadores allí y de ahí se tuvo conocimiento"; en autos, sólo indicó haber recibido la orden verbal directamente de su colega Héctor Enrique Ovando. Y en cuanto a haber ido a buscar a la víctima a la Intendencia, en que refiere que solo acompañó en el traslado y que no se bajó del vehículo, están solo sus dichos, que se contradicen con lo expresado por el mismo y los otros dos sujetos que concurrieron a detener a la víctima a su domicilio. De lo que se ha venido analizando, la circunstancia de haber estado el país bajo una Dictadura, les dio a todos los organismos de seguridad, como el SICAR al que pertenecía este acusado, un poder omnímodo lo que les permitía cometer abusos con entera impunidad, tanto es así que las otras unidades de funcionamiento regular en las esferas militares y policiales deponen que los sujetos que integraban los servicios de seguridad no estaban bajo el mando de nadie más que sus propia estructura.

**TRIGÉSIMO TERCERO:** Que, es cierto que a la época en que ocurrieron los hechos, hacía relativamente poco tiempo que se había producido un golpe militar y a consecuencia de eso las fuerzas armadas y de orden y seguridad habían tomado el completo control del país, pero el estado de excepción constitucional no dejó sin efecto las normas elementales de la obediencia debida. Y si bien queda en evidencia la existencia de órdenes verbales en el curso de los acontecimientos, que tendían notoriamente a la perpetración y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



consumación de los delitos, estas no cumplen con las exigencias que impone el artículo 214 inciso 2° del Código de Justicia Militar en relación a los artículos 334 y 335 del mismo código, por cuanto dichas órdenes si bien fueron imperativas y dadas por superiores jerárquicos a subordinados para exigirles una acción, ellas han versado sobre la consumación y encubrimientos de delitos, por lo que carecerían de legitimidad de acuerdo al artículo 19 del Código de Justicia Militar, con intereses extraños al ámbito militar. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 334, las órdenes imponen la obligación de ser obedecidas por los inferiores cuando se reúnen los requisitos siguientes: 1.- La existencia de una orden de un superior; 2.- Que esta orden sea relativa al servicio; 3.- Que la misma sea dada en uso de sus atribuciones legítimas y 4.- Y en el caso que la orden tienda notoriamente a la perpetración de un delito, ésta se haya representado por el inferior e insistida por el superior.

Resulta obvio que esas normas versan sobre el cumplimiento de una orden de servicio, es decir, propia de la función militar y que aquel que la ordena, la dé en uso de sus atribuciones legítimas, lo que no ocurre en la especie, ya que en ninguna normativa se consigna como orden relativa al servicio el secuestro y tortura de seres humanos.

**TRIGÉSIMO CUARTO:** Que, el acusado ha admitido haber recibido sólo una orden verbal, y lo menos que podía exigirse a un funcionario de Carabineros, era que tuviera a la vista la decisión, porque no se trataba de un simple patrullaje o algún allanamiento, debía detener a una persona por motivos de Ley de Seguridad Interior, y su aludido bajo rango no podía excusarlo de conocer las disposiciones del Código de Justicia Militar.

Atendido a que el defensor ha argumentado sobre el desconocimiento y bajo rango de su defendido, cabe considerar que pareciera que la elección de León para concurrir a detener a la víctima no fue al azar, teniendo en cuenta que había varios agentes que pudieron ser electos para cumplir esta función. La circunstancia de haber sido uno de los elegidos, a pesar de que manifestó que suplió a un colega que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

no se encontraba en dependencias del SICAR en esos momentos, no implica que tenga menos responsabilidad en los hechos que se investigan, teniendo en cuenta que no se trataba de cualquier funcionario, porque a los años fue enviado a realizar un curso básico de inteligencia y que según su hoja de vida, siguió efectuando labores de esa índole en Carabineros al menos hasta 1979, si bien esa información no aclara porque fue elegido para detener a la víctima, si da algunas luces que no se trataba de un simple funcionario de bajo rango, como sostiene su defensa, sino de alguien que aspiraba a la carrera en Inteligencia y que siguió ascendiendo dentro de la Institución.

Por lo que se ha venido considerando se rechaza la eximente de responsabilidad criminal de error de prohibición, ya sea vencible o invencible, ya que no puede atenderse a que un funcionario de Carabineros, creyera que podía cometer delitos en contra de civiles en cumplimiento de una orden de su superior, lo que se le debía exigir es que en esa situación debía representar la orden, o al menos que se le exhibiera algún documento que decretaba la detención de la víctima, lo que no hizo y no puede invocar ignorancia en cuanto a las normas del Código de Justicia Militar.

**TRIGÉSIMO QUINTO:** Que, en cuanto a la figura de detención ilegal respecto de su representado, este tribunal ya dejó establecido en el motivo vigésimo tercero las razones por las que no se cumplen los requisitos del artículo 148 del Código Penal para tener por configurado ese delito en autos, procediendo en cambio la figura del secuestro calificado, por tanto, dicha solicitud también se rechazará. Y en cuanto contestó las acusaciones particulares, habrá que estarse a lo que respecto a esos delitos se indicó en este fallo.

**EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL:**

**EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:**

**TRIGÉSIMO SEXTO:** Que a fojas 2052, el abogado don Álvaro Aburto Guerrero, por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, invocó contra los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

acusados las circunstancias agravantes del artículo 12 N°8 y N°11 del Código Penal, esto es, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable y actuar con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad.

A fojas 2056, la abogada Adriana Rojas Pérez, por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), invocó contra los acusados las circunstancias agravantes del artículo 12 N°8 y N°11 del Código Penal, esto es, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable y actuar con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad.

A fojas 2069, el abogado Cristián Cruz Rivera, en representación de Nelly Adela Álvarez Segovia, Luisa Elizabeth Álvarez Segovia, Mercedes del Rosario Álvarez Segovia, Gumercindo del Pilar Álvarez Segovia y David Alberto Álvarez Segovia, invocó contra los acusados las circunstancias agravantes del artículo 12 N°6 (abuso de superioridad de fuerzas), N°8 (prevalerse del carácter público del ofensor), N°10 (cometer el delito con ocasión de una sedición o desgracia) y 18° (cometer el delito con ofensa o desprecio de la dignidad), todas del Código Penal.

**TRIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que no perjudica a los acusados la circunstancia agravante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 12 N°6 del Código Penal, esto es, abusar el delincuente de la superioridad de su sexo, de sus fuerzas o de las armas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa, por cuanto dichas circunstancias forman parte integrante del tipo, en los términos del artículo 63 del Código punitivo.

Tampoco perjudica a los acusados la circunstancia agravante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 12 N° 8 del Código Penal, esto es, prevalencia del carácter público esgrimida, toda vez que si bien Ricardo Lillo Morandé y Juan León Hernández, al momento de cometer el delito detentaban la calidad de miembros de Carabineros de Chile, en virtud de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Punitivo, dicha causal de agravación es incompatible con el delito que nos ocupa, un crimen de lesa humanidad, en



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

que el abuso de la calidad de funcionario público -agente del Estado- constituye un elemento integrante del tipo.

Lo mismo ocurre con la agravante del artículo 12 N°11, del código punitivo, esto es, ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, porque el secuestro calificado, lo es por haber actuado ante víctimas que no podían ejercer ninguna resistencia, y esa figura conlleva un agravamiento del injusto, de tal manera que la forma en que se ejecutó también constituye un elemento integrante del tipo.

En cuanto a la agravante de cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia, regulada en el N°10 del artículo 12 del código sancionador, también será desestimada, teniendo en consideración para ello que este delito si bien es cierto se ejecutó cuando se había decretado estado de sitio por conmoción interna, lo cierto que, ese fue un estado de guerra presunto y no real, porque "conmoción" de conformidad al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en lo que podría aplicarse a esta situación, consiste en: "tumulto, levantamiento, alteración de un Estado, provincia o pueblo", circunstancia que no aconteció en la especie, desde que las Fuerzas Armadas tomaron el control del país en forma inmediata, por lo expuesto, se desestimarán también esta agravante.

Respecto a la agravante del artículo 12 N°18 del Código punitivo, esto es, ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso, toda vez que es parte integrante del tipo de crímenes de lesa humanidad, el que este sea cometido con ofensa o desprecio a la dignidad del ser humano. Justamente, el sistema internacional de Derechos Humanos nace de la dignidad como valor intrínseco del ser humano y su sistema de justicia busca salvaguardar dicho aspecto. Por lo expuesto, se desestimarán esta agravante.

**EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES Y ATENUANTES:**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

**TRIGÉSIMO OCTAVO:** Que a fojas 2207, el abogado don Juan Carlos Muñoz Torres en representación del acusado Ricardo Lillo Morandé, invocó la eximente de responsabilidad del artículo 214 del Código de Justicia Militar, toda vez que su representado era un subordinado y en el caso concreto únicamente habría recibido órdenes de sus superiores; solicitó que se reconozca la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, considerándose su irreprochable conducta anterior como atenuante muy calificada y el artículo 211 del Código de Justicia Militar, el cual hace referencia al haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico, además pidió se le aplique lo prescrito en el artículo 103 del Código Penal, atendido a que los hechos habrían ocurrido el año 1973 y el plazo máximo de prescripción en nuestro ordenamiento jurídico es de 10 años conforme el artículo 97 del Código Penal; por último solicita se le otorgue alguno de los beneficios contemplados en la Ley N°18.216.

Que en relación a la circunstancia prevista en el artículo 214 del Código de Justicia Militar, que invoca como eximente, cabe tener presente que de acuerdo con los sucesos que se dieron por acreditados, una orden conducente a la perpetración de un ilícito criminal como el comprobado no puede calificarse como "del servicio", que es aquella llamada a ejecutar un "acto de servicio", esto es, aquel que se refiere o tiene relación con las funciones que a cada militar corresponde por el hecho de pertenecer a las fuerzas armadas (artículo 421 del Código de Justicia Militar). A mayor abundamiento, tampoco hay prueba ni aceptación por parte de este acusado acerca del juicio de valoración que, como subalterno, corresponde efectuar al enjuiciado respecto de la orden del superior jerárquico, ni su representación, más cuando el argumento principal de la defensa, al contestar los cargos, insta por la absolución por falta de participación.

Respecto de las atenuantes, en lo que atañe a la circunstancia prevista en el artículo 211 en relación al 214 del Código de Justicia Militar que establece: "Fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214, será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. Y si ellas fueren relativas al servicio podrán ser consideradas como



atenuantes muy calificadas" y el artículo 211 del Código de Justicia Militar, que dispone: "Cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere impartido será el único responsable salvo el caso de concierto previo, en que serán responsables todos los concertados".

Que el artículo 211 del Código de Justicia Militar, sobre obediencia indebida, dispone que fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214, será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico.

Que dicha norma resulta inaplicable a los delitos de lesa humanidad, como el que nos ocupa, toda vez que las sentencias del Tribunal de Nüremberg, que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, establecieron que cualquier persona puede y debe ser capaz de discernir que los crímenes de lesa humanidad jamás pueden ser considerados como parte de sus deberes como soldado.

Que, por su parte, el artículo 214 inciso 2° del Código de Justicia Militar dispone que el inferior será castigado con la pena inferior en un grado a la asignada por la ley al delito cuando haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio y no hubiere cumplido con la formalidad de representarla a su superior. En consecuencia, para que opere la regla de determinación de pena del inciso 2° del artículo 214 del Código de Justicia Militar, es necesario que se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio.

Que dicha norma tampoco resulta aplicable a los delitos de lesa humanidad, como el que afectó a Gumerindo Álvarez Pizarro, toda vez que, como se dijo precedentemente, las sentencias del Tribunal de Nüremberg, que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, establecieron que cualquier persona puede y debe ser capaz de discernir que los crímenes de lesa humanidad jamás pueden ser considerados como parte de sus deberes como soldado y, por tanto, las vejaciones sufridas por la víctima en dependencias del Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta, que derivaron en su posterior muerte, lo que da como resultado un grave



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

daño producido con ocasión de su secuestro, no puede ser amparado por una supuesta orden del servicio.

Que con el mérito del extracto de filiación y antecedentes de Ricardo Lillo Morandé, de fojas 1729, exento de anotaciones pretéritas a la época de los hechos investigados en este proceso, se reconocerá la atenuante de irreprochable conducta anterior, prevista en el número 6 del artículo 11 del Código Penal.

En cuanto a la circunstancia prevista en el artículo 103 del Código Penal, la referida alegación no será aceptada respecto del secuestro calificado, por cuanto la media prescripción, para que opere, está relacionada con el transcurso incompleto del tiempo necesario para extinguir la responsabilidad por prescripción de la acción penal y siempre requiere de un inicio del cómputo para los efectos de concluir que ha transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción; sin embargo, al haberse establecido que el delito investigado en autos es un delito de lesa humanidad, este tiene por expresa disposición normativa el carácter de imprescriptible, por ende, no hay plazo alguno que contabilizar.

Que, además, para que opere la aplicación de la prescripción gradual, el legislador exige que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción de la acción penal o de la pena y que el transcurso del tiempo exigido por la norma se verifique antes de que el responsable se presente o sea habido. De lo anterior se desprende que el artículo 103 del Código Punitivo opera respecto de procesados que se encontraban ausentes durante el desarrollo del proceso, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que el acusado Ricardo Lillo Morandé estuvo siempre presente en el juicio, nunca ausente o rebelde.

Tanto la prescripción como la prescripción gradual benefician al responsable de un delito en consideración a los efectos que provoca el transcurso del tiempo en la necesidad de la pena, la estabilidad social y la seguridad jurídica, efectos que no se presentan respecto de los delitos declarados imprescriptibles.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

Por las razones expuestas, se rechaza la aplicación de la prescripción gradual, contemplada en el artículo 103 del Código Penal.

**TRIGÉSIMO NOVENO:** Que, a fojas 2223, el abogado Mauricio Alex Suazo Araya, en representación del acusado Juan Arturo León Hernández, solicitó que se reconozca la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, y la atenuante del artículo 11 N°9 del mismo Código con carácter muy calificada, y ninguna agravante, y aplicando lo dispuesto en el artículo 68 bis del Código Penal, solicita radicar la pena en 41 días de prisión en su grado máximo, más accesoria del artículo 30 del Código Penal.

Que con el mérito del extracto de filiación y antecedentes de Juan Arturo León Hernández, de fojas 1153, exento de anotaciones pretéritas a la época de los hechos investigados en este proceso, se reconocerá la atenuante de irreprochable conducta anterior, prevista en el número 6 del artículo 11 del Código Penal.

Que en cuanto a la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, prevista en el numeral 9° del artículo 11 del código sancionador, se debe considerar que no obstante que en sus primeras declaraciones el acusado negó tener conocimiento de los hechos, lo que mutó cuando ya se habían reunido elementos probatorios que lo sindicaban como uno de los aprehensores de la víctima Álvarez Pizarro, lo cierto es que cuando corrigió sus dichos entregó detalles precisos y coincidentes con lo expresado por otros testigos, asimismo, a pesar que el peritaje caligráfico estableció que era falsa la firma puesta en sus declaraciones ante el juzgado del crimen en la causa tantas veces citadas, el admitió que había prestado esas declaraciones y que concurrió a detener a la víctima, todo lo anterior permite considerar que prestó colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

#### **DETERMINACIÓN DE LA PENA:**

**CUADRAGÉSIMO:** Que, para determinar la pena que en definitiva se impondrá a los acusados, se consideró que resultaron responsables en calidad de autores del delito de secuestro



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



calificado, en grado consumado, sancionado, conforme a lo dispuesto por los artículos 50, 51 y 141 inciso 3° del Código Penal, en su redacción en la época de los hechos, con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados.

A continuación, se atiende a que concurre respecto del acusado Lillo la atenuante de irreproachable conducta anterior y no le perjudican agravantes, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del mismo cuerpo legal, la pena no se aplicará en su grado máximo.

Respecto de León Hernández, además de la atenuante de irreproachable conducta anterior, se le reconoció la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, por lo que de conformidad a lo previsto en el artículo 68 inciso 3° del Código punitivo, la pena se rebajará en un grado desde el mínimo.

Para regular el quantum de la pena que en concreto se impondrá a los sentenciados se tuvo en consideración la naturaleza del delito -crimen de lesa humanidad- y la extensión del mal causado, el grave daño provocado, que terminó con la vida de la víctima, todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 69 del Código Penal. Asimismo, se ha considerado las funciones y atribuciones que cada uno de los acusados ejercía en el Servicio de Inteligencia de Carabineros y el poder de mando o decisión que ostentaban.

**CUADRAGÉSIMO PRIMERO:** Que, asimismo, conforme a lo ordenado por los artículos 24 del Código Penal y 504 del Código de Procedimiento Penal, los sentenciados serán obligados al pago de las costas de la causa.

#### **EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:**

**CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:** Que, en el primer otrosí del escrito de fojas 2069, el abogado Cristián Cruz Rivera, en representación de Nelly Adela Álvarez Segovia, Luisa Elizabeth Álvarez Segovia, Mercedes del Rosario Álvarez Segovia, Gumercindo del Pilar Álvarez Segovia y David Alberto Álvarez Segovia, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Abogado Procurador Fiscal don Carlos Vega Araya, pidiendo sea condenado a pagar la suma de \$300.000.000 (trescientos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

millones de pesos) a cada uno de los demandantes, más reajuste e intereses hasta el pago efectivo de la indemnización, con costas.

Funda su acción en que está acreditado que el ilícito fue perpetrado por agentes del Estado, específicamente por funcionarios de Carabineros de Chile, y que el Estado de Chile, de mutuo propio, ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ("Comisión Rettig"). Que como consecuencia directa de la detención, torturas y muerte de su padre, sus mandantes han sufrido un profundo daño moral, que se ha traducido en un perjuicio irreparable de índole subjetivo. Que la pérdida de un ser querido es siempre un hecho doloroso, pero que lo es aún más cuando esta pérdida es producto de una violencia irracional, aplicada como un castigo a quienes eran adherentes o formaban parte de una organización política determinada, que se oponía a la dictadura, o se les presumía opositores al régimen militar. Que estos hechos, sumados al temor y violencia desatada en contra de la población civil en la zona, les impidieron vivir el duelo de forma normal, no podían expresar ni compartir el dolor; la impunidad de los autores, la imposibilidad durante muchos años de acceder a la justicia ya que el Estado utilizó a su arbitrio distintos medios para impedir que se acreditara legalmente la verdad de lo sucedido, son algunas de las situaciones que han significado un dolor permanente a sus mandantes. Refiere que Gumercindo Álvarez era una persona relevante en su núcleo familiar, era el jefe de hogar, trabajó y formó familia, para la que se desvivía y educó en el amor y respeto, existían para él y su grupo familiar las condiciones para desarrollarse plena y armónicamente en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, estas plausibles posibilidades fueron violenta y traumáticamente frustradas al ser detenido, torturado y asesinado. Del mismo modo, su cónyuge, hijos y nietos, al verse privados de su presencia sufrieron negativas consecuencias y alteraciones en sus proyectos vitales, de formación y desarrollo al carecer de este importante lazo afectivo. Asimismo, su desaparición incluso afectó la vida afectiva de su cónyuge, la realidad laboral y educacional, incidiendo en sus condiciones de vida.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

**CUADRAGÉSIMO TERCERO:** Que a fojas 2270, comparece Carlos Alberto Vega ARAYA, Abogado Procurador Fiscal de La Serena, por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, solicitando el rechazo de la demanda en virtud de las defensas y excepciones que señala:

a) En primer lugar plantea que los demandantes de autos han obtenido reparación satisfactiva a través de reparaciones simbólicas y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre, lo que pretende reparar ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral y al efecto enumera una serie de estos actos de reparación simbólica que se han efectuado, como la construcción de un memorial en el cementerio del Museo de la Memoria, etcétera. Añade que, además las actoras de autos son titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

b) Enseguida, opone en subsidio la excepción de prescripción extintiva de las acciones civiles de indemnización de perjuicios según lo dispuesto por los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, afirmando que, a la fecha, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado artículo 2332. En subsidio interpone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del cuerpo legal citado porque estas normas han sido consideradas de aplicación general a todo el derecho y no solo al privado, para apoyar esta tesis trae a colación jurisprudencia sobre la materia.

c) En cuanto al daño e indemnización reclamada, indica que al tratarse del daño puramente moral por afectar bienes extrapatrimoniales o inmateriales y por ende no apreciables en dinero, por ello la indemnización no haría desaparecer el daño, por lo que el daño moral no se borra por obra de la indemnización, y -añade- así lo ha establecido por la Excm. Corte Suprema. Señala además que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la



indemnización, ya que, el juez solo estaría obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, y en la cual no tendrían influencia estas capacidades. Señala que las cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan absolutamente excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia.

d) En subsidio de las excepciones precedentes, alega que la fijación del daño moral por los hechos de autos debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por los demandantes de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación, y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De lo contrario, implicaría un doble pago por un mismo hecho. Señala que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia.

e) Por último indica que es improcedente el cobro de reajustes e intereses en la forma solicitada, porque éstos solo podrían devengarse una vez que la sentencia que se dicte en autos acoja las demandas y se encuentre firme y ejecutoriada, porque mientras no esté en ese estado, ninguna obligación tendría su representado de indemnizar, de ahí se deriva que no existe suma alguna que reajustar y los intereses se pueden devengar desde que se encuentre ejecutoriado el fallo que ordene su pago.

**CUADRAGÉSIMO CUARTO:** Que para pronunciarse acerca de las excepciones y/o alegaciones y defensas opuestas cabe considerar que el fundamento de la acción civil deducida por los actores reside en el delito de secuestro calificado cometido en contra de su padre, don Gumerindo del Carmen Álvarez Pizarro, hechos ocurridos entre el 29 de agosto y 2 de septiembre de 1974, por el que se ha hallado culpable a los funcionarios de Carabineros Ricardo Lillo Morandé y Juan Arturo León Hernández, y respecto del cual no se discute su calidad de crimen de lesa humanidad.

Al respecto cabe considerar que la Excma. Corte Suprema ha señalado que la historia fidedigna de la Ley N° 19.123, en cuanto elemento de interpretación de la ley según lo dispone



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

el inciso segundo del artículo 19 del Código Civil, pone de manifiesto que durante la tramitación parlamentaria el debate fue justamente sobre la conceptualización y determinación de la naturaleza jurídica de los beneficios pecuniarios que se otorgarían por medio de ella, de acuerdo a las intervenciones del senador señor Máximo Pacheco y del Ministro de Estado señor Correa, a la época Secretario General de Gobierno, que ilustraron el contexto en que se presentó el proyecto de ley que terminó siendo aprobado que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y establece beneficios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, permiten dimensionar el alcance y objetivo del texto legal en cuestión, inscrito dentro del conjunto de esfuerzos del Estado de Chile dirigido al reconocimiento de responsabilidades y la reparación parcial del daño experimentado por las víctimas de violaciones a los derechos humanos (Excma. Corte Suprema Rol N° 23.441-2014).

Una simple lectura de la ley mencionada permite advertir que allí se estableció una pensión mensual de reparación, en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 17), pensión que tiene fijada por ley el monto y los beneficiarios, los que por lo demás son desagregados según sea la vinculación que tengan con la víctima y su edad, instituyendo beneficios médicos (artículo 28) y educacionales (artículos 29; 30; y, 31), entre otros.

**CUADRAGÉSIMO QUINTO:** Que la historia fidedigna de la ley, sumada a las características de los beneficios que ella otorga, permite concluir que no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, lo que permite entender que los beneficios que se conceden quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores. Consecuencia de lo reseñado es que los beneficios pecuniarios que contempla la Ley N° 19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido. (Corte Suprema Rol N° 9.757-2015)



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

En lo que concierne a la Ley N° 19.988, el bono establecido en el artículo 5°, también reviste un carácter asistencial, voluntariamente fijado por el Estado de Chile, en que las alusiones que se hacen a la pensión asistencial fijada por la Ley N° 19.123, son demostrativos del ánimo del legislador de equiparar a los demás hijos de la víctima con aquellos que se encuentran gozando una pensión de reparación.

Por lo demás, la normativa invocada por el Fisco no contempla en su texto incompatibilidad alguna con la indemnización que en este proceso civil se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación y, el que las asuma el Estado voluntariamente no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues de otra manera sería aceptar que el responsable del daño sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar.

De cualquier manera, es útil dejar constancia que esas reparaciones rigieron desde su reconocimiento y para el futuro, esto es, ellas no comprendieron los padecimientos, desazón, desprotección y humillaciones que la cónyuge y los hijos de don Gumerindo Álvarez Pizarro, sufrieron desde septiembre de 1974 y durante todo el largo período de 16 años que duró la dictadura militar a partir de esa fecha.

**CUADRAGÉSIMO SEXTO:** Que en relación a la excepción de prescripción extintiva de la acción civil deducida en contra del Fisco de Chile, cabe considerar que ésta tiene por objeto obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.

Este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, que obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6°, ambos de la Constitución Política de la República.

Es así que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional en el que representaban al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).

De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República que señala que "el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana".

El artículo 6 de la misma Carta Fundamental, al igual que la disposición antes referida, forma parte de las "Bases de la Institucionalidad" -por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y ordena que: "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

normas dictadas conforme a ella", indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. El mismo artículo 6 enseña que "los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo", y concluye señalando que: "la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley".

Es por esta razón que en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile, al estar en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile.

**CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO:** Que de lo que se ha venido señalando se desprende que el Estado está sujeto a la regla de la responsabilidad, la que no es extraña a nuestra legislación, pues el artículo 3 del Reglamento de La Haya de 1907 señala que "La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento será condenada, si hubiere lugar, a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen su ejército". Complementa lo anterior el artículo 2.3ª del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto señala que: "Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo", el que supone el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este contexto encontramos también el principio 15 de los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que: "Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario".

**CUADRAGÉSIMO OCTAVO:** Que la alegaciones o defensas esgrimidas por la demandada en cuanto a ser excesivos los cobros que se efectúan en la demanda por concepto de indemnización por el daño moral, a los pagos ya recibidos del Estado y a la reajustabilidad demandada, dicen relación con la facultad privativa del tribunal al momento de establecer el quantum indemnizatorio, lo que se determinará en su oportunidad.

**CUADRAGÉSIMO NOVENO:** Que doña **Nelly Adela Álvarez Segovia**, señaló a fojas 58 y 172 que su madre trató de buscar alguna explicación de lo sucedido a su padre, pero que nunca obtuvieron respuestas concretas. Posteriormente, fueron vigilados durante un año y medio más o menos. A fojas 61, doña **Luisa Elizabeth Álvarez Segovia** relata que quedaron demasiado afectados hasta el día de hoy con la muerte de su papá, que su vida fue mala pues su padre era el sustento del hogar y pasaron muchas necesidades como consecuencia, lo que no han superado hasta el día de hoy, sus vidas cambiaron completamente, su madre sin saber leer ni escribir tuvo que salir a trabajar y se constituyó en la principal fuente de ingreso del hogar, entretanto que trataba de buscar respuestas ante las autoridades militares de la época, pero nunca las obtuvo y todo quedó en nada. Añade que en fechas posteriores, en varias oportunidades concurrieron a su casa personas, quienes no se identificaban, vestidos de civil, quienes allanaban la casa y luego se retiraban. A fojas 178, **Gumerindo del Pilar Álvarez Segovia**, declara que su padre era el único sustento que ellos tenían. A partir de ese momento, siguieron todos juntos y su madre tuvo que salir a trabajar, mientras ellos siguieron estudiando, pero se perdió el padre de familia, el sustento del hogar y sus vidas cambiaron rotundamente, incluso los mayores tuvieron que salir a trabajar para ayudar al sustento del hogar, su hermana mayor les ayudaba permanentemente, pues se encontraba casada en ese entonces y con su marido se transformaron en un apoyo importante para ellos, pero el principal apoyo económico lo recibieron de parte de la Iglesia Católica, a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

través de Monseñor Carlos Oviedo Cavada, quien los visitaba periódicamente y les permitió recibir ayuda de parte de la Vicaría de la Solidaridad, donde les entregaban alimentos mensualmente. A fojas 181, **Mercedes del Rosario Álvarez Segovia**, señaló que sus vidas cambiaron radicalmente, pues su padre era el único sustento del hogar, su madre era dueña de casa, sin educación y quedó con 4 hijos situación que la obligó a salir a trabajar para poder mantenerlos. Posteriormente, después de haber enterrado a su padre, fueron bastante tiempo observados, pues se veían varias personas vestidas de civil en las cercanías de la casa. Recuerda también que Monseñor Carlos Oviedo Cavada, les ayudó bastante en el proceso. Finalmente, indica que con el tiempo tuvieron que resignarse a vivir con ese dolor, sabiendo que quizás nunca podrían saber lo que realmente sucedió con su padre, precisamente por la Ley de Amnistía y la permanencia en el poder del Gobierno Militar. A fojas 179, **David Alberto Álvarez Segovia** refirió que su padre era el único sustento del hogar, que sus vidas cambiaron, su padre nunca más regresó al hogar y presenció el sufrimiento de su madre y todas las necesidades que tuvieron que pasar. Su madre tuvo que salir a trabajar para alimentarlos, conjuntamente con su hermana Mercedes, quien durante el día trabajaba y en la noche estudiaba, también recibieron ayuda de la iglesia, a través de Monseñor Carlos Oviedo Cavada, quien en varias ocasiones les fue a dejar alimentos no perecibles. Su madre falleció en el año 1980 al parecer, como consecuencia de tanto trabajo, porque siempre buscó mantenerlos y tenía más de un trabajo para mejorar los ingresos.

**QUINCUAGÉSIMO:** Que con la finalidad de demostrar el daño moral que funda su demanda civil de indemnización de perjuicios, la parte demandante rindió prueba documental.

En efecto, a fojas 42, 51, 1551, 1553, 1554, 1555 y 1556, rolan antecedentes familiares de don Gumercindo del Carmen Álvarez Pizarro, con lo cual se acreditó el parentesco de los demandantes, cuestión que por lo demás no fue discutida por el demandado civil.

**QUINCUAGÉSIMO PRIMERO:** Que para demostrar la existencia del daño moral, se compulsaron a los antecedentes algunos informes, como el de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, donde se acompañan, además, dos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

documentos custodiados a fojas 2305, elaborado por el equipo de profesionales en salud mental de esa institución (Psiquiatra Dra. Nadia Saavedra y las psicólogas Angélica Pizarro y Flavia Taramasco), que atendían a víctimas y familiares y las consecuencias en la salud mental en familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos. Ahí se indica que la ejecución de un familiar representa una experiencia trágica e inédita que actuará sobre las diversas estructuras psíquicas de los individuos afectados provocándoles una constelación sintomática perturbadora e incapacitante, así como cambios profundos en la personalidad y en el curso de su vida. Añade que la estigmatización social del familiar sobreviviente provoca una vivencia altamente disruptiva al enfrentarse permanentemente a la contradicción de la imagen socialmente invalidada y los intentos de establecer la figura pública del ser querido, experimentando sentimientos de culpa y complicidad que dañan aún más el vulnerable estado psíquico de los familiares y el estado de indefensión reedita subjetivamente de manera permanente el hecho traumático. Las secuelas de la pérdida traumática no solo afectan profundamente la salud de los familiares de la víctima, sino que además dañan a la familia como grupo humano, provocando un profundo deterioro de sus vínculos y dinámicas interaccionales causante de severas alteraciones en los hijos y en generaciones futuras. La experiencia de pérdida traumática deja a los familiares en una situación de duelo inconcluso en el que la dinámica de negación/aceptación de la pérdida se transforma en el escenario propicio y complejo para la emergencia de síntomas y vivencias de una experiencia de duelo alterado, patológico difícilmente diferenciable de un episodio depresivo mayor.

Por su parte, se compulsó a fojas 2633, informe del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, donde se concluye que en los familiares de ejecuciones extrajudiciales se asocian de manera patogénica la cronicidad de una situación de duelo congelado que se perpetúa en el tiempo por la imposibilidad de saber toda la verdad que rodeó la muerte de un ser querido, junto con las recurrentes denegaciones de acceso a la justicia de parte del Estado chileno. Esta conjunción de experiencia traumática límite con impunidad es la causa de alteraciones muy graves de la salud mental que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

perciben en esos pacientes. El daño va desde trastornos físicos hasta enfermedades psiquiátricas mayores y graves disfunciones familiares, con manifestaciones en las nuevas generaciones. Por lo general, los familiares de personas asesinadas extrajudicialmente pasan años buscando justicia para sus seres queridos, al tiempo que deben hacer frente a graves problemas económicos, jurídicos, morales y sociales. El ambiente de temor y aislamiento en que viven los familiares de personas asesinadas por agentes del estado, probablemente sea una de las razones por las que se sabe tan poco, hasta ahora, acerca de sus problemas y necesidades. A pesar de que los familiares de personas ejecutadas políticas tienen derecho a recibir reparación, en la práctica ello no ha ocurrido plenamente, debido a muchas dificultades, como la falta de voluntad política y de ayuda jurídica para hacerlo, y el posible trauma que implicaría el hecho de solicitar la reparación. Los asesinatos extrajudiciales perpetrados por agentes del Estado, afectan a los individuos, las familias y a la sociedad en su conjunto.

A fojas 2100, 2108, 2356 y 2365, se acompañaron documentos relativos a los demandantes Luisa Álvarez Segovia, Nelly Adela Álvarez Segovia, Mercedes Álvarez Segovia y David Álvarez Segovia, que dan cuenta de las atenciones psicológicas y psiquiátricas efectuadas a los mismos en el Programa de Atención Integral de Salud (PRAIS), y de los daños en el ámbito psicosocial sufridos por los mismos. Los que dan cuenta del ingreso de doña Luisa Elizabeth Álvarez Segovia al programa en diciembre de 1991, de doña Nelly Adela Álvarez Segovia, el 12 de julio de 1993, quien se tuvo que hacer cargo de su hermano Gumerindo, refiriendo que luego de la ejecución de su padre su madre comenzó a trabajar y posteriormente lo hizo su hermana Mercedes, quien tomó de su cargo a sus hermanos al fallecer la madre, hasta que contrajo matrimonio y los dos hermanos menores (Luisa y David) quedaron "en el aire". Añadió que con el tiempo la familia se ha disgregado lo que ella siente mucho porque su madre luchó por mantenerlos unidos. Su hijo mayor, de nombre Jorge era regalón del abuelo (la víctima) y se enfermó cuando éste murió. A fojas 2108 rola el informe psicológico de daño de doña Mercedes Álvarez Segovia, donde expone como antecedentes relevantes de la historia vital que su padre era muy



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

preocupado porque sus hijos estudiaran y pudiesen desarrollarse profesionalmente y brindar la educación a la que él no pudo acceder, todo el sueldo y sustento económico era para el hogar y la familia; era el único sustento familiar y la Sra. Luisa, estaba dedicada a los quehaceres del hogar y al cuidado de los 4 hijos que habitaban la casa, Mercedes, Luisa, Gumerindo y David, todos estaban cursando la etapa escolar, y posterior al fallecimiento de su padre, la situación familiar cambia completamente, donde doña Luisa, la madre, tuvo que reinventarse y salir a trabajar, puesto que no contaban con los ingresos necesarios ni redes de apoyo para mantenerse, se desempeñó como empleada doméstica, realizando labores de aseo en casas particulares, donde trabajaba muchas horas al día por remuneraciones muy bajas. Por esa razón quien toma el rol parental de cuidado y crianza de sus hermanos es doña Mercedes. La madre trabajó incesantemente por alrededor de 6 años y en 1980 sufrió un accidente cardiovascular, debido a problemas de hipertensión arterial, no tratados. Se concluye en ese informe que doña Mercedes Álvarez Segovia presenta indicadores de Trauma Psicosocial vinculados directamente a daño psicológico producido por la detención, desaparición y muerte de su padre ocurrida en el periodo de la Dictadura Militar, donde las consecuencias posteriores hicieron extensivo a su grupo familiar de origen, el impacto en la disminución de las condiciones vitales de desarrollo, afectando especialmente a ella y sus hermanos debiendo el grupo familiar enfrentar las restricciones en el ámbito económico, social y el impacto en la salud mental de lo vivido por el padre de familia, que se perfila como el principal cuidador de la familia. Se indica también que se evidencian rasgos de duelo no trabajado, con una alta carga emotiva, la evaluada no podía expresar sus emociones y sentimientos debido a lo ocurrido en su familia ya que ella debía ser la fuerte y el sostén para el resto de la familia.

**QUINCUGÉSIMO SEGUNDO:** Que, en el mismo sentido cabe señalar que la Excm. Corte Suprema ha argumentado que: "...en cuanto que lo demandado a título de indemnización por daño moral debe ser legalmente acreditado, se tiene presente que en lo atinente a la prueba del daño moral la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que éste es la lesión



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva. Así, atendida esta particularidad, no pueden aplicarse para precisar su existencia las mismas reglas que las utilizadas para la determinación de los daños materiales, que están constituidos por hechos tangibles y concretos, que indudablemente deben ser demostrados, tanto en lo que atañe a su especie como a su monto. ...Que la comprobación de la transgresión o agravio del derecho subjetivo envuelve per se la prueba de la efectividad del daño moral, de manera que acreditada la existencia del delito por parte de los inculcados y por el cual se les condenó, forzoso es concluir que se ha producido y que debe ser reparado dicho perjuicio, lo que no podría ser de otra forma en tanto que materialmente es difícil, por no decir imposible, medir con exactitud la intensidad con que la muerte de su hermano ha afectado a los demandantes, por la naturaleza del perjuicio producido de todo lo cual se concluye que este tipo de menoscabo, no requiere ser fundamentado ni probado en la forma alegada, considerando, como se ha dicho, el carácter espiritual que reviste. En efecto, la naturaleza e intensidad del dolor no hace indispensable la prueba sobre el mismo, por tratarse de un hecho evidente en cuanto a que la desaparición forzada de una persona produce sufrimiento a sus parientes y cercanos, lo que no requiere de evidencia, daño que debe ser indemnizado, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el tribunal." (Causa Rol N° 30.598-2014).

**QUINCUGÉSIMO TERCERO:** Que, habiendo dado cuenta la prueba documental de las aflicciones que padecieron los demandantes, a lo que debe añadirse lo que expone la jurisprudencia citada en el motivo precedente, se acogerá la demanda.

Para la determinación del quantum de la indemnización y considerando que el pretium doloris es una cuestión subjetiva



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

que debe fijarse de acuerdo a las facultades privativas de este tribunal, no existiendo reglas objetivas para su establecimiento, corresponde a este juzgador determinar o ponerle un precio al dolor sufrido por los demandantes, la prudencia o templanza indica que tratándose de cinco hijos de la víctima, corresponde fijar una suma equitativa para cada uno de ellos, teniendo en consideración que se trata de delitos de lesa humanidad que trastocaron por completo la vida de los demandantes, quienes además, debieron sufrir la pronta partida de su madre.

Para determinar prudencialmente la indemnización por el daño moral y debido a que la Excma. Corte Suprema, en una causa por el delito de torturas, Rol N° 99422-2020, el 25 de agosto de 2021, fijó la suma de \$80.000.000 (ochenta millones de pesos) para la víctima, delito que evidentemente es muy grave y causa un incommensurable daño al que lo sufre, pero en este sentido, se encuentra en un escalón inferior al sufrimiento causado por la muerte, es que se fijará para las cada uno de los hijos de la víctima, la suma de 100.000.000 (cien millones de pesos).

Dichas sumas devengarán el interés por la mora, que deberá calcularse desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada y el pago efectivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N° 6 y 9, 14 N° 1, 15 N°1, 18, 24, 26, 29, 50, 68 inciso 2° y 3°, 69 y 141 inciso 3° -en su redacción de la época- del Código Penal y 10, 50, 108 a 114, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 459, 463, 464, 471 y siguientes, 477 y siguientes, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 510 y 533 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

#### **En cuanto a la acción penal:**

I.- Que se **CONDENA** a **RICARDO LILLO MORANDÉ**, ya individualizado, a la pena de **DIEZ AÑOS Y UN DÍA** de presidio mayor en su grado medio, además, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autores del delito de secuestro calificado, previsto en el artículo 141 inciso 3° del Código Penal, cometido en contra de la víctima don Gumercindo del Carmen Álvarez Pizarro,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX

cometido desde el 29 de agosto al 2 de septiembre de 1974, en la ciudad de Antofagasta.

No reuniéndose los requisitos establecidos en la Ley N°18.216 no se concederá a Ricardo Lillo Morandé ningún beneficio de cumplimiento alternativo de la condena, por lo que la sanción impuesta se cumplirá de manera real y efectiva, y se contará desde que el sentenciado se presente o sea habido. Para el cumplimiento de la pena les servirá de abono a cada uno de los condenados, el tiempo que permaneció en prisión preventiva por este proceso, veinticuatro días, desde el 20 de noviembre de 2018, hasta el 14 de diciembre de 2018, según consta de fojas 1825 y 1918.

II.- Que se **CONDENA** a **JUAN ARTURO LEÓN HERNÁNDEZ, ya individualizado,** a la pena de **CINCO AÑOS,** de presidio menor en su grado máximo, además, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Concurriendo en la especie los requisitos establecidos en la Ley 18.216 se le concederá a Juan Arturo León Hernández el beneficio de libertad vigilada, debiendo permanecer sujeto a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado de Gendarmería de Chile, debiendo cumplir con los requisitos que establece la ley citada en la versión anterior a la Ley 20.603. Si el beneficio le fuera revocado y debiere cumplir efectivamente la pena corporal impuesta le servirá de abono, un día, desde el 28 al 29 de diciembre de 2016, según consta de fojas 1264 y 1283.

**En cuanto a la acción civil:**

III.- Que ha lugar a la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el abogado don Cristian Cruz Rivera en el primer otrosí de fojas 2069 y siguientes, en representación de doña Nelly Adela Álvarez Segovia, Luisa Elizabeth Álvarez Segovia, Mercedes del Rosario Álvarez Segovia, Gumercindo del Pilar Álvarez Segovia y David Alberto Álvarez Segovia, en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por concepto de daño moral causado por el secuestro calificado de su padre don



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



Gumerciendo del Carmen Álvarez Pizarro, fijándoseles a cada uno de los demandantes, una indemnización de \$100.000.000 (cien millones de pesos).

IV.- Que esa suma así determinada devengará intereses desde que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

IV.- Que se condena en costas al demandado civil, Fisco de Chile.

Consúltese el sobreseimiento definitivo de fojas 2494.

Notifíquese personalmente a los sentenciados.

Notifíquese a los apoderados de las partes, por intermedio del Centro Integrado de Notificaciones. Exhórtese al Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago y al Primer Juzgado Civil de Antofagasta respecto de los apoderados que registren domicilio en dichas ciudades.

Ejecutoriada que sea la sentencia, cúmplase con lo dispuesto por el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y consúltese, si no se apelare.

Rol N° 3-2011 (Antofagasta)

**SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL MINISTRO EN VISITA  
EXTRAORDINARIA DON VICENTE HORMAZABAL ABARZÚA Y AUTORIZADA  
POR LA SECRETARIA SUBROGANTE DOÑA SOLEDAD SEPULVEDA FONCK.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEQDXFZBRX